



**Consejo Económico  
y Social**

Distr.  
LIMITADA

E/CN.4/2003/L.11/Add.7  
23 de abril de 2003

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
59º período de sesiones  
Tema 21 b) del programa

**INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 59º PERÍODO DE SESIONES**

**Proyecto de informe de la Comisión**

**Relator: Sr. Branko SOCANAC (Croacia)**

**ÍNDICE\***

<i>Capítulo</i>	<i>Página</i>
II. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN EN SU 59º PERÍODO DE SESIONES	
A. <i>Resoluciones</i>	
2003/68. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo .....	3
2003/69. Los derechos humanos y la bioética .....	6

\* El documento E/CN.4/2003/L.10 y sus adiciones contendrán los capítulos del informe relativos a la organización del período de sesiones y a los diversos temas del programa. Las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión, así como los proyectos de resolución y decisión y otras cuestiones sometidas al Consejo Económico y Social, figurarán en el documento E/CN.4/2003/L.11 y sus adiciones.

**ÍNDICE** (*continuación*)

<i>Capítulo</i>		<i>Página</i>
II. A. ( <i>continuación</i> )		
2003/70.	Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos .....	10
2003/71.	Los derechos humanos y el medio ambiente como parte del desarrollo sostenible.....	18
2003/72.	Impunidad .....	22
2003/73.	Cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico .....	27
2003/74.	Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos .....	32
2003/75.	Arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos .....	38
2003/76.	Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos .....	43
2003/77.	Situación de los derechos humanos en el Afganistán .....	48
2003/78.	Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos.....	54
2003/79.	Situación de los derechos humanos en Camboya .....	64
2003/80.	Situación de los derechos humanos en Sierra Leona .....	70
2003/81.	Cooperación técnica y servicios de asesoramiento en el Chad....	77
2003/82.	Cooperación técnica y servicios de asesoramiento en Liberia.....	78

**2003/68. La protección de los derechos humanos y las libertades  
fundamentales en la lucha contra el terrorismo**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Reafirmando* los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas,

*Reafirmando también* la importancia fundamental de respetar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y el estado de derecho, incluso en respuesta al terrorismo y al temor al terrorismo,

*Recordando* que los Estados tienen la obligación de proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas,

*Recordando también* las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional,

*Recordando además* la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, y, entre otras cosas, la responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de promover y proteger el goce efectivo de todos los derechos humanos,

*Reiterando* el párrafo 17 de la sección I de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, en que se afirma que los actos, métodos y prácticas terroristas, en todas sus formas y manifestaciones, son actividades orientadas a la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizan a los gobiernos legítimamente constituidos, y que la comunidad internacional debe tomar las medidas necesarias para intensificar la cooperación a fin de prevenir y combatir el terrorismo,

*Señalando* la resolución 56/160 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 2001, así como su propia resolución 2002/35, de 22 de abril de 2002, sobre los derechos humanos y el terrorismo,

*Reafirmando* su condena inequívoca de todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos,

independientemente de su motivación, por ser criminales e injustificables, y renovando su compromiso de estrechar la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo,

*Destacando* que todas las personas tienen derecho a todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin distinción de ningún tipo, incluso por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición,

*Recordando* que, de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce que algunos derechos no se pueden suspender en ninguna circunstancia y que toda medida para suspender la aplicación de las disposiciones del Pacto deberá ser compatible con dicho artículo en todos los casos, y subrayando la naturaleza excepcional y temporal de toda suspensión de esa clase,

*Tomando nota* de la Observación general N° 29, sobre los estados de emergencia, aprobada por el Comité de Derechos Humanos el 24 de julio de 2001,

1. *Acoge con beneplácito* la resolución 57/219 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2002;
2. *Toma nota* del informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 57/219 de la Asamblea General (E/CN.4/2003/120) y expresa su satisfacción por sus conclusiones acerca de la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en la campaña internacional para eliminar la práctica y la amenaza del terrorismo y acerca del importante papel doble de las Naciones Unidas de promover el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de tratar a la vez de lograr la cooperación internacional en el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos;
3. *Afirma* que los Estados deben cerciorarse de que las medidas que se adopten para combatir el terrorismo sean compatibles con las obligaciones que tienen en virtud del derecho internacional, y en particular con las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario;

4. *Invita* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos a proseguir el importante diálogo que han entablado con el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad y a intensificar su cooperación mutua;

5. *Pide* a todos los procedimientos y mecanismos especiales pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos, así como a los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos, que consideren, en el marco de sus mandatos, la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el contexto de las medidas de lucha contra el terrorismo;

6. *Alienta* a los Estados a que, en la lucha contra el terrorismo, tengan en cuenta las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, y tomen en consideración las recomendaciones de los procedimientos y mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y los comentarios y puntos de vista pertinentes de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos;

7. *Pide* al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, utilizando los mecanismos existentes:

a) Siga examinando la cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, tomando en consideración la información fidedigna de todas las fuentes;

b) Siga formulando recomendaciones generales relativas a la obligación de los Estados de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales al adoptar medidas para combatir el terrorismo;

c) Siga proporcionando ayuda y asesoramiento sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo a los Estados que lo soliciten, así como a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas;

8. *Pide* al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que presente un informe sobre la aplicación de esta resolución a la Asamblea General, en su quincuagésimo octavo período de sesiones, y a la Comisión, en su 60º período de sesiones.

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

### **2003/69. Los derechos humanos y la bioética**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Recordando* que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

*Deseosa* de preservar la dignidad y la integridad del ser humano,

*Recordando* el derecho de toda persona, reconocido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y recordando el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos,

*Consciente* de que la rápida evolución de las ciencias de la vida abre inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de las personas y de toda la humanidad, pero también de que ciertas prácticas pueden poner en peligro la integridad y la dignidad de las personas,

*Deseosa*, en consecuencia, de asegurar que los progresos científicos benefician a las personas y se desarrollen respetando los derechos humanos,

*Refiriéndose* a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 11 de noviembre de 1997, y a la resolución 53/152 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en que la Asamblea hizo suya la Declaración,

*Afirmando* el principio de que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas,

*Recordando* que en el artículo 10 de la Declaración se afirma, entre otras cosas, que ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos,

*Acogiendo complacida* la resolución 22 aprobada el 2 de noviembre de 2001 en la 31ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la que se invita al Director General a que presente a la Conferencia General, en su 32ª reunión, en 2003, los estudios técnicos y jurídicos efectuados en relación con la posibilidad de elaborar normas universales sobre la bioética,

*Recordando* sus resoluciones 1991/45, de 5 de marzo de 1991, 1993/91, de 10 de marzo de 1993, 1997/71, de 16 de abril de 1997, 1999/63, de 28 de abril de 1999 y 2001/71, de 25 de abril de 2001,

*Refiriéndose* a la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma humano,

*Refiriéndose asimismo* a la resolución 1997/42 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de 28 de agosto de 1997, sobre esta cuestión,

*Recordando* la aprobación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 4 de abril de 1997, del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina,

*Convencida* de la necesidad de desarrollar en los planos nacional e internacional una ética de las ciencias de la vida, y reconociendo la necesidad de formular normas y establecer una cooperación a nivel internacional a fin de asegurar que toda la humanidad saque provecho de la utilización de dichas ciencias e impedir toda mala utilización de sus aplicaciones,

*Rechazando enérgicamente* toda doctrina de superioridad racial, junto con las teorías que intentan determinar la existencia de las llamadas razas humanas distintas,

1. *Toma nota* del informe del Secretario General (E/CN.4/2003/98 y Add.1);
2. *Expresa su reconocimiento* a los gobiernos que han respondido a la solicitud de información formulada por la Comisión en su resolución 2001/71, de 25 de abril de 2001, e invita a los gobiernos que aún no hayan respondido a hacerlo;
3. *Invita* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que participe, dentro de la esfera de su competencia, en el debate sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos y la bioética;
4. *Celebra* la iniciativa de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de preparar una declaración internacional sobre los datos genéticos humanos y exhorta a los Estados Miembros a que cooperen plenamente en la finalización de un texto;
5. *Insta* a los Estados a que adopten medidas para asegurar la protección y la confidencialidad de los datos genéticos personales relativos a individuos vivos o muertos; a fin de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios del consentimiento y la confidencialidad sólo pueden restringirse por ley, por motivos de peso y dentro de los límites del derecho internacional público y de la normativa internacional de derechos humanos;
6. *Exhorta* a los Estados que aún no lo hayan hecho a que se ocupen de la cuestión de la discriminación derivada de la aplicación de la genética, a fin de proteger los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad;
7. *Señala a la atención* de los gobiernos la importancia de la investigación sobre el genoma humano y de sus aplicaciones para el mejoramiento de la salud de las personas y de la humanidad entera, así como la necesidad de salvaguardar los derechos humanos, la dignidad y la identidad de las personas;



8. *Alienta* a los Estados a que participen en las deliberaciones del grupo de trabajo de la Sexta Comisión que tendrán lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2003, durante el quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, en relación con el tema del programa "Convención internacional contra la clonación de seres humanos con fines de reproducción";

9. *Reafirma* la importancia de recibir información de las organizaciones y los organismos especializados de las Naciones Unidas e invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización Mundial de la Salud y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como a los demás órganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas, a que informen al Secretario General de las actividades realizadas en sus respectivos sectores para velar por que se tengan en cuenta los principios enunciados por la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y a que pongan esos informes a disposición de los gobiernos;

10. *Invita* a los gobiernos que aún no lo hayan hecho a que prevean la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de evaluar, especialmente en cooperación con el Comité Internacional de Bioética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las cuestiones éticas, sociales y humanas suscitadas por las investigaciones biomédicas con seres humanos y, en particular, las referentes al genoma humano y sus aplicaciones, y les invita además a que pongan en conocimiento del Secretario General la creación de tales órganos a fin de promover el intercambio de experiencias entre tales instituciones;

11. *Pide nuevamente* a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que estudie la contribución que puede aportar a las reflexiones del Comité Internacional de Bioética sobre el seguimiento de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y que informe al respecto a la Comisión en su 61º período de sesiones;

12. *Pide* al Secretario General que elabore un informe basado en esas contribuciones para que la Comisión lo examine en su 61º período de sesiones.

*62ª sesión,*  
*25 de abril de 2003.*  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

**2003/70. Decenio de las Naciones Unidas para la educación  
en la esfera de los derechos humanos**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Guiada* por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos,

*Reafirmando* el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

*Recordando* las disposiciones de otros instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reflejan los objetivos del artículo mencionado,

*Teniendo en cuenta* su resolución 1993/56, de 9 de marzo de 1993, en la que recomendó que se estableciera, como cuestión prioritaria de la política de educación, el conocimiento de los derechos humanos, tanto en su dimensión teórica como en su aplicación práctica,

*Estimando* que, para que todas las mujeres, todos los hombres y los niños puedan realizar su pleno potencial humano, se les debe dar a conocer todos sus derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,

*Estimando también* que la educación en la esfera de los derechos humanos constituye un importante vehículo para eliminar la discriminación por motivos de género y para garantizar la igualdad de oportunidades mediante la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer,

*Convencida* de que la educación en la esfera de los derechos humanos no debe limitarse al suministro de información, sino que debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida y mediante el cual las personas, a todos los niveles de desarrollo y en todas las sociedades, aprendan a respetar la dignidad de los demás, y debe crear medios y métodos para garantizar ese respeto en todas las sociedades,

*Convencida también* de que la educación y la información sobre los derechos humanos contribuyen a promover un concepto de desarrollo compatible con la dignidad de las mujeres y los hombres de todas las edades, que tenga en cuenta en particular a los sectores vulnerables de la sociedad, como son los niños, los jóvenes, las personas de edad, los indígenas, las minorías, los pobres de las zonas rurales y urbanas, los trabajadores migrantes, los refugiados, las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las personas discapacitadas,

*Reconociendo* la función que desempeña la educación en lo que respecta a forjar una cultura de paz, en particular mediante la enseñanza de la práctica de la no violencia, lo que promoverá los Propósitos y Principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,

*Reconociendo* que la educación y el aprendizaje en la esfera de los derechos humanos son un instrumento para la prevención de los conflictos y para la prevención de las violaciones de los derechos humanos, así como una contribución a la transformación y la consolidación pacíficas después de los conflictos, y, por lo tanto, un factor clave para lograr la seguridad humana,

*Afirmando* que la educación en la esfera de los derechos humanos es fundamental para cambiar las actitudes y los comportamientos basados en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad en las sociedades, y que esa educación es un factor determinante en la promoción, difusión y protección de los valores democráticos de la justicia y equidad, que son esenciales para prevenir y combatir la propagación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, como reconoció la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001,

*Teniendo presente* la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (A/CONF.157/23), en particular los párrafos 78 a 82 de su parte II,

*Recordando* la función del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de coordinar los programas pertinentes de educación e información pública en la esfera de los derechos humanos,

*Recordando también* la resolución 49/184 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, en la que la Asamblea proclamó el período de diez años que comenzó el 1º de enero de 1995 como Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, acogió con satisfacción el Plan de Acción para el Decenio (A/51/506/Add.1, apéndice) y pidió al Alto Comisionado que coordinara la ejecución del Plan de Acción,

*Tomando nota* de las resoluciones 57/206 y 57/212 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2002, en que la Asamblea invitó a todos los gobiernos a que reafirmaran sus compromisos y sus obligaciones de desarrollar estrategias nacionales para la educación en materia de derechos humanos que fueran amplias, participatorias y eficaces y que pudieran plasmarse en un plan nacional de acción para la educación en la esfera de los derechos humanos, e invitó también a las Naciones Unidas, a las organizaciones intergubernamentales, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y a otras organizaciones intergubernamentales competentes a que adoptaran un enfoque de todo el sistema respecto del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004,

*Observando con beneplácito* la labor de promoción de la educación en la esfera de los derechos humanos que en todos los países del mundo realizan los educadores y las organizaciones no gubernamentales, así como diversas organizaciones intergubernamentales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

*Reconociendo* la inestimable y creativa función que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales y comunitarias en la promoción y protección de los derechos humanos difundiendo información pública y emprendiendo actividades de educación en la esfera de los derechos humanos, especialmente a nivel popular y en las comunidades alejadas y rurales,

*Tomando nota con reconocimiento* de la labor realizada hasta ahora por la Oficina del Alto Comisionado para fomentar el intercambio de información sobre la educación en materia de derechos humanos mediante una base de datos y una recopilación de recursos relacionados con esa educación, y para divulgar información sobre los derechos humanos mediante su sitio en la Web y sus programas de publicaciones y relaciones externas,

*Observando con beneplácito* la iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado de seguir ampliando el proyecto titulado "Ayuda conjunta a comunidades", iniciado en 1998, que se financia con contribuciones voluntarias y tiene por objetivo proporcionar pequeños subsidios a organizaciones comunitarias y locales que realicen actividades de carácter práctico en el contexto de los derechos humanos,

*Reconociendo* la utilidad que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen en la educación en materia de derechos humanos para promover el diálogo y la comprensión de esos derechos y, en ese contexto, acogiendo con beneplácito iniciativas como el "CyberSchoolBus" y "La juventud opina", del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,

*Recordando* la evaluación mundial de mitad de período de los avances hechos hacia el logro de los objetivos del Decenio, realizada por la Oficina del Alto Comisionado, en cooperación con las demás entidades principales que participan en las actividades del Decenio, que se incluyó en el informe correspondiente presentado por la Alta Comisionada a la Asamblea General en su quincuagésimo quinto período de sesiones (A/55/360),

1. *Toma nota con reconocimiento* del informe del Alto Comisionado sobre la ejecución del Plan de Acción del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004 (E/CN.4/2003/100), solicitado en el párrafo 18 de la resolución 2002/74 de la Comisión;

2. *Acoge complacida* las medidas adoptadas por los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a fin de ejecutar el Plan de Acción del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004, que se indican en el informe del Alto Comisionado;

3. *Toma nota con reconocimiento también* del estudio del Alto Comisionado sobre las medidas complementarias del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004 (E/CN.4/2003/101), solicitado en el párrafo 17 de la resolución 2002/74 de la Comisión;

4. *Insta* a todos los gobiernos a que sigan contribuyendo a la ejecución del Plan de Acción, en particular:

a) Fomentando, según lo permitan las circunstancias del país, el establecimiento de comités nacionales de representación amplia para la educación en la esfera de los derechos humanos que se encarguen de formular planes de acción nacionales generales, eficaces y sostenibles sobre educación e información en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la evaluación mundial de mitad de período del Decenio y las directrices relativas a esos planes de acción que impartió la Oficina del Alto Comisionado;

b) Haciendo participar a las organizaciones no gubernamentales y comunitarias nacionales y locales en la ejecución de sus planes de acción nacionales y alentándolas y prestándoles apoyo en la tarea;

c) Iniciando y llevando a cabo programas culturales y educativos que tengan por objeto combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y respaldando y llevando a cabo campañas de información pública y programas específicos de capacitación en el ámbito de los derechos humanos, tal como se pidió con insistencia en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia;

5. *Alienta* a los gobiernos a considerar la posibilidad de que, en el marco de sus planes de acción nacionales sobre educación en materia de derechos humanos:

- a) Establezcan centros de recursos y capacitación sobre los derechos humanos abiertos al público y dedicados a la investigación y la capacitación no sexista de instructores;
- b) Preparen, recopilen, traduzcan y difundan publicaciones de educación y capacitación sobre los derechos humanos;
- c) Organicen cursos, conferencias, seminarios y campañas de información pública y presten asistencia para la ejecución de proyectos de cooperación técnica patrocinados a nivel internacional para la educación y la información pública sobre los derechos humanos;

6. *Insta* a los Estados a que intensifiquen sus esfuerzos en la esfera de la enseñanza, incluida la enseñanza de los derechos humanos, a fin de promover el conocimiento y la comprensión de las causas, las consecuencias y los males del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, e insta también a los Estados, en consulta con las autoridades educativas y el sector privado, cuando proceda, y alienta a las autoridades educativas y al sector privado, cuando proceda, a que elaboren material didáctico, en particular libros de texto y diccionarios, dirigidos a combatir esos fenómenos y, en ese contexto, exhorta a los Estados a que den importancia, si procede, a la revisión y modificación de los libros de texto y los programas de estudio a fin de eliminar todo elemento que pueda promover el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia o pueda reforzar estereotipos negativos, y a que incluyan material que invalide esos estereotipos;

7. *Alienta* a las autoridades competentes a velar por que la educación que se imparta en las escuelas infantiles incluya lecciones de comprensión mutua, tolerancia, ciudadanía activa y derechos humanos y la promoción de una cultura de paz;

8. *Alienta* a los Estados a que, cuando existan centros a nivel nacional de recursos y capacitación sobre los derechos humanos abiertos al público, fomenten su capacidad para apoyar los programas de educación e información pública sobre los derechos humanos en los planos internacional, regional, nacional y local;

9. *Alienta* a los gobiernos a que sigan apoyando con contribuciones voluntarias la labor de educación e información pública que lleva a cabo la Oficina del Alto Comisionado en el marco del Plan de Acción;

10. *Alienta* a la Oficina del Alto Comisionado a que siga apoyando la labor de educación e información de los distintos países en la esfera de los derechos humanos mediante su programa de cooperación técnica en la materia, incluida la organización de cursos de capacitación y actividades de educación entre iguales, y la elaboración de material didáctico específicamente destinado a profesionales, así como la difusión de material informativo sobre los derechos humanos dentro del marco de los proyectos de cooperación técnica, a que continúe desarrollando sus bases de datos y compilaciones de recursos sobre educación en materia de derechos humanos y a que siga observando la evolución de ésta;

11. *Pide* a la Oficina del Alto Comisionado que siga ejecutando y amplíe el proyecto "Ayuda conjunta a las comunidades" y que considere la posibilidad de emplear otros medios adecuados para apoyar las actividades educativas en la esfera de los derechos humanos, incluidas las desarrolladas por las organizaciones no gubernamentales;

12. *Invita* a los organismos especializados y a los programas y fondos pertinentes de las Naciones Unidas a que sigan contribuyendo, dentro de su respectivo ámbito de competencia, a la ejecución del Plan de Acción y a la Campaña Mundial de Información Pública y a que cooperen en esa tarea y se coordinen entre sí y con la Oficina del Alto Comisionado;

13. *Alienta* a los órganos, organismos y entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas y a todos los órganos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a que impartan capacitación sobre derechos humanos a todos los funcionarios de las Naciones Unidas;

14. *Pide* a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que, cuando examinen los informes de Estados Partes, insistan en las obligaciones que incumben a dichos Estados en la esfera de la educación sobre derechos humanos y a que así lo hagan constar en sus observaciones finales;

15. *Pide* a todos los mecanismos pertinentes de la Comisión, a saber los grupos de trabajo y los relatores especiales, representantes o expertos, que incluyan de manera sistemática en sus informes una sección dedicada específicamente a la educación en materia de derechos humanos, según corresponda a su mandato, y que incluyan dicha educación entre los temas del



programa de sus reuniones anuales, con miras a reforzar la contribución que aportan a esa educación;

16. *Alienta* a los gobiernos, las organizaciones regionales y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que estudien la posibilidad de que todas las partes interesadas, con inclusión del sector privado, las instituciones de desarrollo, comerciales y financieras y los medios de comunicación, presten apoyo y aporten contribuciones a la educación en la esfera de los derechos humanos, y a que recaben la cooperación de todos ellos en la formulación de estrategias relativas a dicha educación;

17. *Invita* a la Unión Internacional de Telecomunicaciones a que incluya la contribución de la tecnología de la información a la educación en materia de derechos humanos en el proceso de preparación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y en la Cumbre misma, que se celebrará en Ginebra en diciembre de 2003;

18. *Alienta* a las organizaciones internacionales y regionales a que formulen estrategias para lograr una difusión más amplia del material didáctico sobre derechos humanos a través de las redes regionales y a que elaboren programas especiales para cada región a fin de lograr la mayor participación posible de las entidades nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en los programas de educación en la esfera de los derechos humanos;

19. *Pide* a la Oficina del Alto Comisionado que celebre consultas con todos los Estados Miembros e informe a la Comisión, en su 60º periodo de sesiones, acerca del establecimiento de un fondo voluntario para la educación en la esfera de los derechos humanos, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 51 del Plan de Acción para el Decenio, que se financiaría con recursos de entidades privadas y públicas y sería establecido por el Secretario General antes del final del Decenio (2004) y administrado por la Oficina del Alto Comisionado de conformidad con el reglamento financiero de las Naciones Unidas;

20. *Pide también* a la Oficina del Alto Comisionado que intensifique su cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

21. *Pide además* a la Oficina del Alto Comisionado que, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebre

consultas con todos los Estados Miembros sobre los logros y los fallos registrados en el actual Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004), teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad internacional ya reseñadas en el informe de evaluación de mitad de período del Decenio (A/55/360) y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades realizadas recientemente en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004 (E/CN.4/2003/100), e informe de ello a la Comisión en su próximo período de sesiones;

22. *Invita* a la Oficina del Alto Comisionado y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que estudien la posibilidad de dedicar a este asunto una parte de todas las reuniones regionales y subregionales pertinentes que hayan previsto celebrar entre el actual período de sesiones de la Comisión y el siguiente;

23. *Pide* al Alto Comisionado que señale la presente resolución a la atención de todos los miembros de la comunidad internacional y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que desarrollan actividades de información pública y de educación en la esfera de los derechos humanos y que informe a la Comisión, en su 60º período de sesiones, sobre los progresos realizados en su aplicación.

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

### **2003/71. Los derechos humanos y el medio ambiente como parte del desarrollo sostenible**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Acogiendo con satisfacción* la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (A/CONF.199/20, cap. I, resolución 1) y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (A/CONF.199/20, cap. I, resolución 2),

*Reafirmando* la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (A/CONF.151/26, vol.I y Corr.1, resolución 1 y anexo I) y el

Programa 21 (ibíd., anexo II), aprobados el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

*Recordando* sus resoluciones 1994/65 de 9 de marzo de 1994, 1995/14 de 24 de febrero de 1995, 1996/13 de 11 de abril de 1996 y 2002/75 de 25 de abril de 2002, y sus decisiones 1993/114 de 10 de marzo de 1993, 1997/102 de 3 de abril de 1997 y 2001/111 de 25 de abril de 2001,

*Tomando nota* de los informes presentados a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías por su Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente (E/CN.4/Sub.2/1992/7 y Add.1, E/CN.4/Sub.2/1993/7 y E/CN.4/Sub.2/1994/9 y Corr.1),

*Teniendo presentes* los objetivos y metas de la Declaración del Milenio y el amplio temario de las Naciones Unidas, que comprende la erradicación de la pobreza, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz,

*Tomando nota* del Simposio Mundial de Jueces sobre el desarrollo sostenible y la función del derecho patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrado en Johannesburgo del 18 al 20 de agosto de 2002,

*Consciente* del mandato de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de promover la ejecución del Programa 21 y el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, así como de la importante labor desarrollada en la esfera ambiental por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros foros competentes,

*Celebrando* los esfuerzos que actualmente se realizan para aplicar el principio 10 de la Declaración de Río, y tomando nota de la entrada en vigor del Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la adopción de decisiones y acceso a la justicia en cuestiones ambientales (Convenio de Aarhus), así como de otras iniciativas, como las Directrices de Sofía de la Comisión Económica para Europa, la Estrategia de participación del público de la Organización de los Estados Americanos, la primera Conferencia Internacional sobre Participación del Público de la Reunión Asia-Europa (ASEM) y la labor de seguimiento a cargo de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, la Nueva

Alianza para el Desarrollo de África y la decisión de 10 de febrero de 2003 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

*Considerando* que la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible pueden contribuir también al bienestar humano y potencialmente al disfrute de los derechos humanos,

*Recordando* que toda persona tiene el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

1. *Reafirma* que la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el respeto de la diversidad cultural, son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y conseguir que éste beneficie a todas las personas, como se señala en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible;

2. *Recuerda* que los daños ambientales pueden tener efectos negativos para el disfrute de algunos derechos humanos;

3. *Recuerda* la amplia labor, los informes y las resoluciones aprobados por la Comisión de Derechos Humanos sobre las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y los señala a la atención de todos los órganos e instituciones interesados;

4. *Reafirma* que toda persona tiene el derecho, individualmente o en asociación con otras, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales y exhorta a los Estados a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger el ejercicio legítimo de los derechos humanos de todos al promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible;

5. *Subraya* la importancia que tiene para los Estados que, al preparar sus políticas ambientales, tengan en cuenta el modo en que la degradación del medio ambiente puede afectar a los miembros desfavorecidos de la sociedad, como las personas o grupos de personas que son víctimas u objeto del racismo, como se señala en la Declaración y Programa de Acción de

Durban de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia;

6. *Alienta* a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que se apliquen los principios de la Declaración de Río, en particular el principio 10, a fin de contribuir, entre otras cosas, al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, como la reparación y las vías de recurso;

7. *Reafirma* que la buena gestión de los asuntos públicos en cada país y a nivel internacional es indispensable para el desarrollo sostenible;

8. *Acoge con satisfacción* la Declaración Ministerial adoptada el 23 de marzo de 2003 con ocasión del Tercer Foro Mundial del Agua, celebrado en Kyoto (Japón) en la que se destaca la importancia de lograr que la buena gestión pública esté más específicamente centrada en el vecindario y la comunidad abordando el problema de la equidad en la distribución de los beneficios y teniendo debidamente en cuenta la necesidad de atender a los pobres y las perspectivas de género en las políticas del agua, y observa que en la Declaración se llama a promover la participación de todos los interesados y a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las actuaciones;

9. *Celebra también* las medidas adoptadas por Estados, como las medidas jurídicas y las actividades de sensibilización de la opinión pública, que promueven y protegen los derechos humanos y que también ayudan a promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible;

10. *Pide* a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que, en el marco de sus respectivos mandatos y presupuestos y programas de trabajo aprobados, sigan concertando los esfuerzos que despliegan en las actividades de fomento de la capacidad del poder judicial;

11. *Pide* al Secretario General que presente a la Comisión de Derechos Humanos en su 60º período de sesiones un informe sobre la atención que se presta a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, teniendo en cuenta las aportaciones que han hecho

las organizaciones y órganos internacionales competentes, y que transmita también dicho informe a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;

12. *Decide* seguir examinando esta cuestión en su 60º período de sesiones en relación con el mismo subtema del programa.

*62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]*

## **2003/72. Impunidad**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Guiada* por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes, así como por la Declaración y Programa de Acción de Viena y en particular el párrafo 91 de la sección E de su parte II,

*Recordando* la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

*Recordando* todas las resoluciones anteriores de la Comisión sobre la cuestión de la impunidad,

*Tomando nota* del informe del Secretario General sobre la impunidad (E/CN.4/2003/97) y teniendo presentes todos los informes anteriores de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la impunidad,

*Tomando nota* de la resolución 2001/22 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de 16 de agosto de 2001, titulada "Cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad" y recordando asimismo todas las resoluciones anteriores de la Subcomisión sobre la impunidad,

*Reconociendo* la importancia de combatir la impunidad respecto de todas las violaciones de los derechos humanos que constituyan delito,

*Reconociendo* la labor del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda,

*Reconociendo* que el establecimiento de la Corte Penal Internacional es una importante contribución para poner fin a la impunidad,

*Reconociendo también*, en tanto que medidas de lucha contra la impunidad y fomento de la responsabilidad, el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona y la formulación de sus primeras acusaciones, el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona y el establecimiento de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación en Timor-Leste y de la Sala Especial para Delitos Graves del Tribunal de Distrito de Dili,

*Tomando nota* de los esfuerzos desplegados por el Secretario General y el Gobierno de Camboya para crear salas extraordinarias en los tribunales nacionales de Camboya para perseguir los delitos cometidos por los jemeres rojos,

*Convencida* de que la práctica y la expectativa de la impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario alientan esas violaciones y son uno de los obstáculos fundamentales para la observancia de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y para la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario,

*Convencida también* de que la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la entrega a la justicia de sus autores, incluidos sus cómplices y colaboradores, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de archivos históricos de esas violaciones y la restitución de la dignidad de las víctimas mediante el reconocimiento y la conmemoración de sus padecimientos constituirán una referencia para las sociedades futuras, y de que todo ello es parte integrante de la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la prevención de futuras violaciones,

*Reconociendo* que la responsabilidad de los autores, incluidos los cómplices, de violaciones graves de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda

reparación eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad en un Estado,

*Acogiendo con agrado* el establecimiento, por varios Estados en los que han ocurrido graves violaciones de los derechos humanos en el pasado, de mecanismos para denunciar esas violaciones, como las comisiones investigadoras o las comisiones encargadas de averiguar la verdad y fomentar la reconciliación, que complementan el sistema de justicia,

*Convencida* de la necesidad de que los gobiernos luchen contra la impunidad investigando los atropellos pasados o presentes y tomando medidas para impedir que se repitan,

1. *Subraya* la importancia de luchar contra la impunidad para prevenir las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, e insta a los Estados a que presten la debida atención a la cuestión de la impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular las cometidas contra mujeres y niños, y a que adopten medidas apropiadas para hacer frente a esa importante cuestión;

2. *Subraya también* la importancia de adoptar todas las medidas posibles y necesarias para que respondan ante la justicia los autores, incluidos los cómplices, de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, reconoce que no debería concederse la amnistía a quienes cometan violaciones del derecho humanitario internacional y de la normativa de derechos humanos que constituyan delitos graves e insta a los Estados a que actúen respetando las obligaciones que les corresponden conforme al derecho internacional;

3. *Reconoce* la importancia histórica de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 1º de julio de 2002 y exhorta a todos los Estados a que estudien la posibilidad de ratificarlo o de adherirse a él;

4. *Reconoce* que ya en la ceremonia inaugural de la Corte Penal Internacional que tuvo lugar el 11 de marzo de 2003, 89 Estados habían ratificado el Estatuto de Roma o se habían adherido a él, encarece la importancia de que los Estados Partes cumplan sus obligaciones en virtud de este Estatuto y pide a los Estados facultados para ello que sigan participando activamente en la Asamblea de los Estados Partes;



5. *Exhorta* a los Estados y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que consideren la posibilidad de prestar a los Estados que lo soliciten asistencia y cooperación concreta y práctica con miras a alcanzar los objetivos establecidos en la presente resolución;

6. *Exhorta* a los Estados a que sigan apoyando la labor del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda, y estudien maneras de apoyar otras iniciativas encaminadas a establecer mecanismos judiciales especiales, en cooperación con las Naciones Unidas, de conformidad con las normas internacionales de justicia, equidad y un enjuiciamiento con las debidas garantías, incluso en los planos regional y nacional;

7. *Alienta* a los Estados a que presten apoyo financiero y de otra índole al Tribunal Especial para Sierra Leona, elogia a los Estados que han prestado ya dicho apoyo y expresa su satisfacción por la puesta en marcha efectiva de dicho Tribunal;

8. *Reconoce* que para las víctimas de violaciones de los derechos humanos el conocimiento público de su sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones, incluidos los cómplices, es un paso esencial hacia la rehabilitación y la reconciliación, e insta a los Estados a que redoblen sus esfuerzos para ofrecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un proceso justo y equitativo mediante el cual puedan investigarse y hacerse públicas esas violaciones, y a que alienten a las víctimas a participar en dicho proceso, incluida la adopción de medidas para garantizar a las víctimas y a los testigos la protección, el apoyo y la asistencia que convengan y que respondan a sus necesidades, comprendidos procedimientos para tener en cuenta el género, en las actuaciones judiciales, de verdad y de reconciliación;

9. *Acoge complacida* a este respecto el establecimiento en algunos Estados de comisiones de la verdad y la reconciliación para investigar las violaciones de los derechos humanos que se han producido allí, celebra la publicación en esos Estados de los informes de esas comisiones y alienta a otros Estados en que se hayan producido violaciones graves de los derechos humanos a que establezcan mecanismos apropiados para denunciar esas violaciones a fin de complementar el sistema de justicia;

10. *Reconoce* que delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura son violaciones del derecho internacional y que los Estados

deberían enjuiciar o extraditar a los culpables de esos crímenes, e insta a todos los Estados a que tomen medidas eficaces para cumplir su obligación de enjuiciar o extraditar a los autores de esos crímenes;

11. *Encarece* la importancia de encausar a los culpables de delitos relacionados con el sexo y los delitos de violencia sexual que constituyen, en determinadas circunstancias, un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o una violación o infracción grave del derecho internacional humanitario;

12. *Insta* a los Estados, así como a los órganos internacionales competentes, a que velen por que las medidas para combatir la impunidad, incluidos los procedimientos judiciales y de verdad y reconciliación, comprendan procedimientos que tengan en cuenta los derechos y las necesidades especiales de los niños;

13. *Alienta* a los Estados en su empeño por reforzar su capacidad nacional para combatir la impunidad y pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que facilite a los Estados que lo soliciten asistencia técnica y jurídica para elaborar leyes nacionales y crear instituciones que combatan la impunidad, de conformidad con las normas internacionales de justicia y equidad y un enjuiciamiento con las debidas garantías;

14. *Recuerda* su resolución 1998/53, de 17 de abril de 1998, en la que tomó nota del Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, anexo II) (los Principios), elaborada por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que dé a conocer estos Principios, toma nota de que los Principios se han aplicado ya en los planos regional y nacional e invita a otros Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales a que estudien la posibilidad de integrar los Principios en sus actividades encaminadas a combatir la impunidad;

15. *Pide* al Secretario General que invite de nuevo a los Estados a proporcionar información, incluidas las mejores prácticas, sobre las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para combatir la impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y sobre los recursos de que puedan disponer las víctimas de esas violaciones;

16. *Pide también* al Secretario General que encargue un estudio independiente, con cargo a los recursos existentes, sobre las mejores prácticas, que comprenda recomendaciones, con objeto de ayudar a los Estados a reforzar su capacidad nacional para combatir todos los aspectos de la impunidad, teniendo en cuenta los Principios y la manera en que se han aplicado, recogiendo la evolución reciente y examinando la cuestión de su ulterior aplicación, teniendo asimismo en cuenta la información y las observaciones recibidas en cumplimiento de la presente resolución, y que presente un informe al respecto a la Comisión a más tardar en su 60º período de sesiones;

17. *Invita* a los relatores especiales y otros mecanismos de la Comisión a que sigan considerando debidamente la cuestión de la impunidad en el cumplimiento de sus mandatos;

18. *Decide* seguir examinando esta cuestión en su 60º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

**2003/73. Cooperación regional para la promoción y protección de  
los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Recordando* su resolución 2002/82, de 26 de abril de 2002,

*Reiterando* que uno de los Propósitos de las Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

*Reafirmando* que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados, que la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en su conjunto de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y asignándoles la misma importancia y que, si bien debe tenerse presente la importancia de las particularidades nacionales y regionales y los diversos contextos históricos, culturales y religiosos, es deber de

los Estados, sea cual sea su sistema político, económico y cultural, promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,

*Destacando* que la cooperación regional puede desempeñar una importante función en la promoción del respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

*Reconociendo* la importancia de aplicar un criterio integrador, gradual, práctico y adaptable con el fin de mejorar la cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos, según el ritmo y las prioridades que establezcan por consenso los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico,

*Reconociendo también* que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente,

*Reconociendo además* la importancia de la educación en materia de derechos humanos en los contextos académico y no académico para la promoción y la protección de los derechos humanos,

*Reconociendo* la valiosa contribución que pueden aportar las instituciones nacionales independientes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en la esfera de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico,

*Acogiendo con satisfacción* la celebración del 11º Seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, que se celebró en Islamabad del 25 al 27 de febrero de 2003,

1. *Acoge complacida* el informe del Secretario General (E/CN.4/2003/109) y los progresos que se han registrado en la aplicación de la resolución 2002/82 de la Comisión, de 26 de abril de 2002;

2. *Destaca* la importancia de los vínculos y de los aspectos que se refuerzan mutuamente de las cuatro actividades previstas en el Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico (E/CN.4/1998/50, anexo II), adoptado durante el sexto Seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región

de Asia y el Pacífico, celebrado en Teherán del 28 de febrero al 2 de marzo de 1998, a saber, la educación en materia de derechos humanos, las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos, los planes nacionales de acción para la promoción y protección de los derechos humanos y el fomento de la capacidad nacional en materia de derechos humanos, y las estrategias para la realización del derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales y, en ese contexto, toma conocimiento de los avances en relación con el programa de acción para 2002-2004 aprobado en Beirut en el décimo Seminario;

3. *Destaca también* que el fomento y fortalecimiento de la capacidad nacional para la promoción y protección de los derechos humanos con arreglo a las condiciones nacionales constituye el fundamento más sólido para establecer una cooperación regional eficaz y duradera en la esfera de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico;

4. *Encomia* la contribución hecha por el Gobierno del Pakistán, como país anfitrión del 11º Seminario, a la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico;

5. *Hace suyas* las conclusiones del 11º Seminario sobre las nuevas medidas que se han de tomar para facilitar el proceso de cooperación regional en la región de Asia y el Pacífico;

6. *Acoge con satisfacción* los debates a fondo celebrados durante el 11º Seminario, en los que se examinó la evolución en la región de Asia y el Pacífico durante el último año en las cuatro esferas prioritarias identificadas en el Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico;

7. *Acoge también con satisfacción* la intensificación del valioso intercambio de experiencias nacionales concretas que tuvo lugar en el 11º Seminario en relación con la realización de las cuatro esferas del Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico;

8. *Toma nota* de la contribución de las instituciones nacionales independientes, las organizaciones intergubernamentales y los representantes de organizaciones no gubernamentales al 11º Seminario y de la iniciativa tomada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

para los Derechos Humanos de organizar una consulta de entidades no gubernamentales un día antes de la inauguración oficial del 11º Seminario;

9. *Toma nota también* de la diversidad de opiniones expresadas en el 11º Seminario sobre las posibles modalidades regionales o subregionales de cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico como parte de un criterio integrador, gradual, práctico y adaptable, así como de la evaluación de la aplicación del Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico;

10. *Reafirma* la conveniencia de elaborar planes de acción nacionales en materia de derechos humanos en un proceso que garantice la participación de una amplia gama de ministerios y organismos estatales competentes de ámbito nacional, provincial y local, de instituciones nacionales de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones académicas y de otros sectores de la sociedad civil, así como la conveniencia de evaluar esos planes a fin de aprovechar sus enseñanzas;

11. *Toma nota con agradecimiento* del establecimiento de instituciones nacionales independientes en países de la región de Asia y el Pacífico y de su importante contribución al proceso de cooperación regional;

12. *Alienta* a los gobiernos a que promuevan el desarrollo de estrategias nacionales para la educación en materia de derechos humanos que sean amplias, participativas, eficaces y sostenibles y a que aceleren el ritmo de aplicación de esos planes y estrategias en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004) a fin de lograr avances significativos antes del fin del Decenio;

13. *Reconoce* la importancia de la buena gestión de los asuntos públicos a nivel nacional y a nivel internacional para velar por que todos los derechos humanos sean protegidos y por que los recursos destinados al desarrollo se utilicen correcta y eficazmente para garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo;

14. *Toma nota* de los debates sostenidos en el 11º Seminario sobre, entre otras cosas, todos los obstáculos que se oponen al ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y

culturales y del derecho al desarrollo, así como sobre la necesidad de cooperación internacional a fin de apoyar los esfuerzos de los países por superar esos obstáculos;

15. *Alienta* a todos los Estados de la región a que tomen medidas concretas en el plano nacional en relación con la aplicación del Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico y a que se aseguren de que los seminarios regionales organizados como parte de ese Programa marco vayan acompañados de actividades nacionales y subregionales concretas y sostenibles, así como de programas de formación y sensibilización para los funcionarios del Estado y los grupos profesionales interesados de importancia clave como la policía, el personal penitenciario, los educadores, los jueces, los abogados y los parlamentarios, según el caso;

16. *Celebra* los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado por organizar asociaciones para la ejecución de sus actividades con arreglo al Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico a fin de aumentar la capacidad nacional de promoción y protección de los derechos humanos en la región;

17. *Alienta* a todos los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico a que consideren, según convenga, la posibilidad de utilizar los servicios ofrecidos por las Naciones Unidas, en el marco del programa de servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos, para seguir fortaleciendo la capacidad nacional en la esfera de los derechos humanos y, a este respecto hace un llamamiento al Alto Comisionado para que siga prestando la debida atención a este programa;

18. *Celebra* las contribuciones hechas a la Oficina del Alto Comisionado por los Estados de la región de Asia y el Pacífico e invita a todos los Estados de la región a que estudien la posibilidad de contribuir por primera vez o de aumentar su contribución, en particular para actividades en la esfera de la cooperación técnica y el fortalecimiento de la capacidad y de las infraestructuras nacionales en lo referente a los derechos humanos, como se indica en el *Llamamiento Anual de 2003*;

19. *Pide* al Secretario General que presente a la Comisión en su 60º período de sesiones un informe que contenga las conclusiones del 12º Seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, e información sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución;

20. *Decide* seguir examinado esta cuestión en su 60º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

*62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVIII.]*

**2003/74. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado  
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Recordando* que, en su informe a la Comisión Especial del Consejo Económico y Social (E/CN.4/1988/85 y Corr.1), la Comisión reafirmó que la consideración primordial que se tendría en cuenta al nombrar al personal de todas las categorías sería la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y que estaba convencida de que este objetivo era compatible con el principio de una distribución geográfica equitativa y tenía en cuenta las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas,

*Recordando también* que, en los párrafos 11 y 17 de la parte II de la Declaración y Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidió al Secretario General y a la Asamblea General que proporcionaran suficientes recursos humanos, económicos y de otra índole para que el Centro de Derechos Humanos pudiera realizar sus actividades en forma eficaz, eficiente y rápida, y reconoció la necesidad de reestructurar el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos para que respondiera a sus necesidades reales,

*Reafirmando* la trascendencia de las particularidades nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, así como de los diferentes sistemas políticos, económicos y jurídicos,

*Reconociendo* que las Naciones Unidas propugnan el multilingüismo como medio de promover, proteger y preservar la diversidad de idiomas y culturas en todo el mundo y que un multilingüismo auténtico promueve la unidad en la diversidad y la concordia internacional,



*Teniendo en cuenta* la necesidad de prestar especial atención a la contratación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de personal procedente de Estados Miembros no representados o insuficientemente representados, en particular de los países en desarrollo, lo que mejorará la composición actual del personal, sobre la base de una distribución geográfica más equitativa,

*Observando con profunda inquietud* que en el informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con arreglo a la resolución 2002/80 de la Comisión, de 25 de abril de 2002, relativo a la composición geográfica y las funciones del personal de la Oficina del Alto Comisionado (E/CN.4/2003/111) se observa claramente que una región está sin lugar a dudas excesivamente representada y que el desequilibrio ha empeorado (véanse los anexos de la presente resolución),

*Expresando nuevamente su preocupación* por la no representación o la insuficiente representación de varios Estados Miembros, en especial países en desarrollo, en el personal de la Oficina del Alto Comisionado, teniendo presente en particular el criterio de la distribución geográfica equitativa,

*Expresando también su preocupación* porque la prevalencia de personal de proyectos, al igual que la distribución geográfica de los consultores, ha distorsionado la distribución geográfica del personal de la Oficina en favor de Europa occidental y América del Norte, en comparación con la distribución geográfica de toda la Secretaría,

1. *Toma nota* del informe del Alto Comisionado sobre la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
2. *Acoge con satisfacción* la firme decisión expresada por el Alto Comisionado en el Llamamiento Anual de 2003 de incorporar a todo el personal que trabaja en Ginebra en un sistema de administración de personal integrado en el marco de las normas y los reglamentos de las Naciones Unidas;
3. *Lamenta* que no se hayan hecho progresos en la aplicación de las resoluciones sobre este asunto, que una región ostente más de la mitad de los puestos de la Oficina del Alto Comisionado y más puestos que los otros cuatro grupos regionales juntos, y que hayan

disminuido los puestos sujetos a distribución geográfica y haya aumentado el personal no sujeto a distribución geográfica;

4. *Expresa su preocupación* porque las nuevas contrataciones no se han utilizado para corregir el desequilibrio a favor de una región y porque más de la mitad del personal recientemente contratado para puestos no sujetos a distribución geográfica procede de esa misma región, a la que corresponden más funcionarios de contratación que a las otras cuatro regiones juntas;

5. *Expresa también su preocupación* por la extensión de la práctica de asignar asesores técnicos (personal de la serie 200) para desempeñar funciones operativas, que deberían ser competencia del personal de la serie 100, práctica contraria a las normas establecidas que debería abandonarse;

6. *Reafirma* que el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas debe servir de guía al Secretario General en su política de contratación del personal de la Organización, teniendo en cuenta el criterio de la distribución geográfica equitativa;

7. *Reafirma también* las resoluciones de la Asamblea General 49/222 A y B, de 23 de diciembre de 1994 y 20 de julio de 1995, 51/226, de 3 de abril de 1997, 53/221, de 7 de abril de 1999, 55/258, de 14 de junio de 2001 y 57/xxx, de 27 de marzo de 2003 sobre la gestión de los recursos humanos;

8. *Reafirma además* el párrafo 3 de la sección X de la resolución 55/258 de la Asamblea General sobre la gestión de los recursos humanos, en el que se reitera la solicitud hecha al Secretario General de que siga incrementando sus esfuerzos por mejorar la composición de la Secretaría garantizando una distribución geográfica amplia y equitativa del personal en todos los departamentos;

9. *Considera* que es necesario adoptar medidas urgentes, concretas e inmediatas para modificar la actual distribución geográfica del personal de la Oficina del Alto Comisionado, favoreciendo una distribución más equitativa de los puestos, de conformidad con el Artículo 101 de la Carta, en particular mediante la contratación de personal de los países en desarrollo, incluso para puestos clave;

10. *Pide* que el Secretario General tome las disposiciones necesarias para que se preste especial atención a la contratación de personal de los Estados Miembros no representados e insuficientemente representados, en particular de países en desarrollo, para proveer las vacantes existentes, así como para nuevos puestos en la Oficina del Alto Comisionado, a fin de lograr una distribución geográfica equitativa, dando especial prioridad a la contratación para puestos de alto nivel y del cuadro orgánico, así como a la contratación de mujeres;

11. *Pide* al Alto Comisionado que vele por que, en consonancia con la resolución 50/11 de la Asamblea General, de 2 de noviembre de 1995, el personal contratado domine y utilice al menos uno de los idiomas de trabajo de la Secretaría y por que se aliente y tenga en cuenta debidamente el uso de otro de los seis idiomas oficiales, particularmente en el momento de decidir los ascensos y los incrementos periódicos dentro de cada categoría, con objeto de garantizar el equilibrio lingüístico en el seno de la Organización;

12. *Insta* a los donantes a que en la medida de lo posible aporten sus contribuciones sin fines especificados, para dar flexibilidad al Alto Comisionado en el nombramiento de personal y la asignación de recursos entre las diferentes actividades y proyectos;

13. *Pide nuevamente* al Secretario General que, al firmar con los países acuerdos para proporcionar a la Oficina del Alto Comisionado los servicios de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, inste a esos países a que procuren asignar recursos financieros adicionales para garantizar que personas de países en desarrollo puedan trabajar en calidad de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, conforme al principio de la distribución geográfica equitativa; además, se debe establecer un mecanismo permanente en virtud del cual, por cada funcionario subalterno del cuadro orgánico de un país donante que se incorpore a la Oficina del Alto Comisionado, se incorpore otro funcionario subalterno del cuadro orgánico de un país en desarrollo;

14. *Destaca* la importancia de que todos los puestos, inclusive los correspondientes a nombramientos especiales para operaciones sobre el terreno, se anuncien públicamente, y de que se difundan descripciones pormenorizadas de las funciones en todos los Estados antes de llenarlos;

15. *Pide* al Alto Comisionado que vele por que no se encomienden a los funcionarios subalternos del cuadro orgánico tareas políticamente delicadas en las que pueda ponerse en entredicho su imparcialidad;

16. *Afirma* que los consultores no deberán desempeñar funciones que correspondan a los funcionarios de la Organización ni tener responsabilidad representativa o de supervisión alguna, que el Alto Comisionado deberá abstenerse de recurrir a los consultores para realizar funciones asignadas a puestos de plantilla, que los consultores deberán ser contratados sólo en estricta conformidad con las normas vigentes y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y en los casos en que la Organización carezca de personal especializado a los efectos, y que el Alto Comisionado deberá empeñarse más en lograr un equilibrio geográfico entre los consultores calificados y los distintos contratistas;

17. *Reafirma* la importancia de garantizar el carácter universal, objetivo y no selectivo del examen de las cuestiones de derechos humanos y pide al Alto Comisionado que siga velando por que en el desempeño de su mandato y en el de la Oficina del Alto Comisionado se rijan por estos principios;

18. *Recalca* que el personal de la Oficina del Alto Comisionado debe mantener su neutralidad y respetar plenamente la independencia de la labor de todos los mecanismos de la Comisión y de los órganos creados en virtud de tratados, a la vez que apoya su funcionamiento;

19. *Reitera* su petición al Alto Comisionado de que utilice la política de las nuevas contrataciones para corregir el actual desequilibrio en la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado;

20. *Pide también* al Alto Comisionado que presente a la Comisión en su 60º período de sesiones un informe general sobre la aplicación de la presente resolución, que deberá incluir:

a) La composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado, dividida en los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas que ha establecido la Asamblea General (Estados de África, Estados de Asia, Estados de América Latina y el Caribe, Estados de Europa occidental y otros Estados, y Estados de Europa oriental), con una indicación, entre otras cosas, de la categoría, la nacionalidad y el sexo del personal permanente y del que no sea de plantilla;

- b) Las disposiciones tomadas para mejorar la situación actual y sus resultados;
- c) Recomendaciones para mejorar la situación actual;

21. *Señala a la atención* de la Asamblea General la presente resolución en el contexto del examen del tema del programa sobre la gestión de los recursos humanos;

22. *Recuerda* la petición a la Dependencia Común de Inspección de que realice un examen exhaustivo de la gestión y administración de la Oficina del Alto Comisionado, en particular respecto de sus repercusiones en las políticas de contratación y la composición del personal, y que presente un informe sobre el particular a la Comisión en su 60º período de sesiones, con propuestas concretas para la aplicación de la presente resolución;

23. *Decide* examinar esta cuestión en su 60º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

#### Anexo 1

### PERSONAL DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

#### Distribución geográfica (número de puestos)\*

Grupos regionales	Puestos sujetos a distribución geográfica Cuadro 1				Puestos no sujetos a distribución geográfica Cuadro 2				Total			
	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003
África	11	10	12	10	25	21	22	24	36	31	34	34
Asia	15	13	17	16	1	6	9	8	16	19	26	24
Estados de América Latina y el Caribe	8	9	9	9	8	10	13	15	16	19	22	24
Estados de Europa oriental	5	5	5	6	1	6	6	7	6	11	11	13
Europa occidental y otros Estados**	36	41	48	45	61	69	85	96	97	110	133	141
Total de puestos	75	78	91	86	96	112	135	150	171	190	226	236

\* Las cifras correspondientes a 2003 se basan en los cuadros 1 y 2 del Informe del Alto Comisionado (E/CN.4/2003/111). Las cifras correspondientes a los años anteriores se basaron en los informes del Alto Comisionado para esos años.

\*\* Incluye a Suiza e Israel.

**Anexo 2**

**PERSONAL DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS  
 NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS**

**Distribución geográfica de los puestos (porcentaje del total de puestos)\***

Grupos regionales	Puestos sujetos a distribución geográfica				Puestos no sujetos a distribución geográfica				Total			
	(En porcentaje)											
	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003
África	15	13	13	11,6	26	19	16	16	21	16	15	14,4
Asia	20	17	19	18,6	1	5	7	5	9	10	11	10,1
Estados de América Latina y el Caribe	11	11	10	10,5	8	9	10	10	9	10	10	10,1
Estados de Europa oriental	6	6	5	7	1	5	4	5	3	6	6	5,5
Europa occidental y otros Estados**	48	53	53	52,3	61	62	63	64	56	58	59	59,8

\* Los porcentajes para 2003 se calcularon sobre la base de los cuadros 1 y 2 del Informe del Alto Comisionado (E/CN.4/2003/111). Las cifras correspondientes a los años anteriores se calcularon sobre la base de los informes del Alto Comisionado para esos años.

\*\* Incluye a Suiza e Israel.

*62ª sesión,  
 25 de abril de 2003.*

[Aprobada en votación registrada por 32 votos contra 14  
 y 7 abstenciones. Véase cap. XVIII.]

**2003/75. Arreglos regionales para la promoción y protección  
 de los derechos humanos**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Recordando* su resolución 1993/51, de 9 de marzo de 1993, y sus resoluciones posteriores relativas a los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos,

*Recordando también* la resolución 32/127 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1977, y las resoluciones posteriores de la Asamblea sobre esta cuestión,

*Teniendo presentes* sus resoluciones pertinentes sobre los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica en materia de derechos humanos, incluida su resolución 2002/87, de 26 de abril de 2002, la más reciente sobre la cuestión,

*Teniendo presentes también* la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados el 25 de junio de 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en los que se reiteró, entre otras cosas, la necesidad de que se estudiara la posibilidad de establecer, donde aún no existiesen, arreglos regionales y subregionales para la promoción y protección de los derechos humanos,

*Recordando* que en la Conferencia Mundial se recomendó que se facilitaran más recursos a fin de afianzar los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos en el marco del programa de cooperación técnica en materia de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

*Reafirmando* que los arreglos regionales desempeñan un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos y deberían reforzar las normas universales de derechos humanos enunciadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y su protección,

*Observando* los progresos realizados hasta la fecha en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel regional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales regionales,

*Teniendo en cuenta* que la cooperación entre las Naciones Unidas y los arreglos regionales en materia de derechos humanos sigue teniendo un carácter tanto sustantivo como de apoyo y que existen posibilidades de que aumente,

*Acogiendo complacida* el hecho de que la Oficina del Alto Comisionado haya aplicado sistemáticamente un enfoque regional y subregional, utilizando diversos medios y métodos complementarios, para aumentar al máximo los efectos de las actividades de las Naciones Unidas a nivel nacional,

1. *Toma nota con satisfacción* del informe del Secretario General sobre los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos (E/CN.4/2003/107);

2. *Observa con agrado* la cooperación y asistencia que sigue prestando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la tarea de seguir afianzando los actuales arreglos y mecanismos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante cooperación técnica destinada al fomento de la

capacidad nacional, la información pública y la educación, con miras a intercambiar información y experiencia en la esfera de los derechos humanos;

3. *Observa también con agrado*, a ese respecto, la estrecha cooperación de la Oficina del Alto Comisionado en la organización de cursos de capacitación y talleres regionales y subregionales en la esfera de los derechos humanos, reuniones de expertos gubernamentales de alto nivel y conferencias regionales de instituciones nacionales dedicadas a los derechos humanos, con el propósito de crear en las regiones mayor conciencia de las cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, mejorar los procedimientos y examinar los diversos sistemas de promoción y protección de las normas de derechos humanos universalmente aceptadas, así como de determinar los obstáculos que se oponen a la ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos y estrategias para superarlos;

4. *Reconoce*, por lo tanto, que los progresos en la promoción y protección de los derechos humanos dependerán fundamentalmente de la labor que se realice en los planos nacional y local y que el planteamiento regional debe suponer una cooperación y coordinación intensas con quienes colaboran en esa labor, teniendo también presente la importancia de la cooperación internacional;

5. *Destaca* la importancia del programa de cooperación técnica en materia de derechos humanos, reitera su llamamiento a todos los gobiernos para que consideren la posibilidad de aprovechar los medios que ofrece este programa de las Naciones Unidas de organizar cursos de información o capacitación en el plano nacional para funcionarios gubernamentales sobre la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y la experiencia recogida por los órganos internacionales competentes, y observa con satisfacción, a ese respecto, el establecimiento de proyectos de cooperación técnica con gobiernos de todas las regiones;

6. *Acoge con satisfacción* el aumento de los intercambios entre las Naciones Unidas y los órganos creados por las Naciones Unidas en virtud de los tratados relativos a los derechos humanos, por una parte, y las organizaciones intergubernamentales regionales, como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otras instituciones regionales, por la otra;



7. *Acoge también con satisfacción* el despliegue por la Oficina del Alto Comisionado de representantes regionales en las subregiones y en las comisiones regionales para entablar unas relaciones de trabajo más estrechas con los Estados, las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales;

8. *Celebra* los progresos hechos en el establecimiento de arreglos regionales y subregionales para la promoción y protección de los derechos humanos y, a este respecto, observa con interés:

a) La experiencia positiva de la presencia regional y subregional de la Oficina del Alto Comisionado en África meridional, central, oriental y occidental, ejemplo de lo cual es la creación del Centro Subregional para los Derechos Humanos y la Democracia en África central, en Yaundé;

b) Los resultados de los diálogos regionales africanos celebrados en Ginebra y Arusha del 5 al 7 de noviembre de 2001 y del 24 al 26 de mayo de 2002, respectivamente, en lo que se refiere a brindar orientaciones a los gobiernos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales y a mejorar los vínculos con la Unión Africana y otras organizaciones subregionales;

c) El aumento del valioso intercambio de experiencias nacionales concretas en los 10º y 11º Seminarios sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, celebrados en Beirut e Islamabad del 4 al 6 de marzo de 2002 y del 25 al 27 de febrero de 2003, respectivamente, en relación con la aplicación del Programa marco de cooperación técnica regional en Asia y el Pacífico, que contribuye a mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en la región;

d) El Programa Marco de Quito de Cooperación Técnica en la esfera de los derechos humanos, que sirve de base para la estrategia regional de la Oficina del Alto Comisionado y tiene como objetivo fortalecer la capacidad nacional para la promoción de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y a este respecto se congratula de la reunión sobre la puesta en práctica del sistema de órganos creados en virtud de tratados celebrada en Quito en agosto de 2002;

e) Los esfuerzos realizados por la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por mejorar la coordinación entre los mecanismos regionales y de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos;

f) La continua cooperación, en particular en las actividades a nivel de país, entre las organizaciones regionales de Europa, a saber, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa y la Unión Europea, y de Asia central, y la Oficina del Alto Comisionado, así como los acuerdos entre la Comisión Europea y la Oficina para financiar proyectos de cooperación técnica;

g) La celebración de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos y Democratización en Dubrovnik (Croacia) del 8 al 10 de octubre de 2001, organizada conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado, el Gobierno de Croacia y la Comunidad Europea, que brindó la oportunidad de examinar la evolución en el sector de los derechos humanos en la región;

9. *Invita* a los Estados de las regiones en que todavía no existen arreglos regionales sobre derechos humanos a que consideren la posibilidad de concertarlos con miras a establecer en ellas mecanismos regionales adecuados para la promoción y protección de los derechos humanos;

10. *Pide* al Secretario General que siga aumentando los intercambios entre las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales regionales que se ocupan de los derechos humanos y proporcione recursos suficientes, con cargo al presupuesto ordinario de cooperación técnica, para las actividades de la Oficina del Alto Comisionado encaminadas a promover los arreglos regionales;

11. *Pide* a la Oficina del Alto Comisionado que siga prestando especial atención a las formas más apropiadas de proporcionar asistencia, en el marco del programa de cooperación técnica, a los países de las diversas regiones que la soliciten y que, cuando proceda, formule las recomendaciones del caso, y, a este respecto, toma nota con interés de la intención del Alto Comisionado de aplicar un enfoque regional para fortalecer las actividades de las Naciones

Unidas relacionadas con los derechos humanos a nivel de los países en el marco del proceso de reforma de las Naciones Unidas del Secretario General;

12. *Invita* al Secretario General a que, en el informe que presentará a la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones, proporcione información acerca de los progresos realizados desde la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Viena en el incremento del intercambio de información y en la ampliación de la colaboración entre los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos y las organizaciones regionales que actúan en la esfera de la promoción y protección de los derechos humanos;

13. *Pide* al Secretario General que le presente, en su 61º período de sesiones, un informe sobre el estado de los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, que formule propuestas y recomendaciones concretas sobre los medios adecuados para fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y los arreglos regionales en materia de derechos humanos, y que incluya en ese informe los resultados de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución;

14. *Decide* seguir estudiando esta cuestión en su 61º período de sesiones.

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVIII.]

#### **2003/76. Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Recordando* las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en particular la resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993, y sus propias resoluciones relativas a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos,

*Acogiendo con agrado* el creciente interés mostrado en todo el mundo por la creación y el fortalecimiento de instituciones nacionales independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos,

*Convencida* del importante papel que desempeñan esas instituciones nacionales en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en la sensibilización y la creación de una mayor conciencia pública respecto de esos derechos y libertades,

*Reconociendo* que cada Estado tiene la prerrogativa de escoger, al crear una institución nacional, el marco jurídico más adecuado a sus necesidades y circunstancias particulares para conseguir que los derechos humanos se promuevan y protejan en el ámbito nacional de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos,

*Recordando* la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993 (A/CONF.157/23), en los que se reafirmaba el importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de derechos humanos y su función en la reparación de las violaciones de los derechos humanos, la divulgación de información sobre esos derechos y la educación en materia de derechos humanos,

*Recordando* el Programa de Acción (véase A/CONF.157/NI/6) adoptado por las instituciones nacionales que se reunieron en Viena del 14 al 16 de junio de 1993 durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en el que se recomendaba que se reforzaran las actividades y programas de las Naciones Unidas para atender las solicitudes de asistencia de los Estados que desearan crear o fortalecer sus instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos,

*Acogiendo con agrado* el fortalecimiento de la cooperación internacional entre las instituciones nacionales de derechos humanos, en particular por medio del Comité de Coordinación Internacional de Instituciones Nacionales,

*Acogiendo también con agrado* el fortalecimiento en todas las regiones de la cooperación regional entre las instituciones nacionales de derechos humanos, y entre las instituciones nacionales de derechos humanos y otros foros regionales de derechos humanos,

*Valorando* la existencia de redes regionales de promoción de los derechos humanos en Europa y África, la labor que sigue realizando la Red de instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas y la labor del Foro Regional de Instituciones Nacionales de Derechos

Humanos de Asia y el Pacífico, en particular los resultados de su séptima reunión anual, celebrada en Nueva Delhi en noviembre de 2002,

*Tomando nota* de la iniciativa del Consejo de la Liga de los Estados Árabes, mencionada en sus resoluciones 6089 de 12 de marzo de 2001, 6243 de 5 de septiembre de 2002 y 6032 de 24 de marzo de 2003, de revisar y actualizar la Carta Árabe de Derechos Humanos de 1994 y de alentar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales árabes en apoyo de esta iniciativa,

*Advirtiendo* el importante papel que desempeñan y la contribución que aportan las instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos y la importancia de que continúe su participación apropiada,

1. *Reafirma* la importancia de crear instituciones nacionales eficaces, independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993;

2. *Reitera*, con ocasión del décimo aniversario de su reconocimiento por la Asamblea General, la importancia que siguen teniendo los Principios de París, señala la utilidad de seguir reforzando su aplicación y alienta a los Estados, a las instituciones nacionales y otras partes interesadas a estudiar las formas de lograrlo;

3. *Alienta* a los Estados a que establezcan tales instituciones, o a que las fortalezcan si ya existen, según se indica en la Declaración y Programa de Acción de Viena;

4. *Reconoce* que las instituciones nacionales pueden desempeñar un papel decisivo en la promoción y la garantía de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos y exhorta a todos los Estados a que velen por que todos los derechos humanos estén debidamente contemplados en los mandatos de las instituciones nacionales de derechos humanos en el momento en que se establezcan;

5. *Acoge con agrado* las decisiones anunciadas por un creciente número de Estados de establecer instituciones de ese tipo, o de considerar su establecimiento, en particular la tendencia en favor del establecimiento de instituciones de ese tipo en los países desarrollados;

6. *Toma nota con satisfacción* de los esfuerzos de los Estados que han otorgado una mayor autonomía e independencia a sus instituciones nacionales, en particular asignándoles una función de investigación o reforzando esa función, y alienta a otros gobiernos a que consideren la posibilidad de tomar medidas semejantes;

7. *Reconoce* el importante y constructivo papel que pueden desempeñar los individuos, los grupos y las instituciones para promover y proteger mejor los derechos humanos, y alienta los esfuerzos que realizan las instituciones nacionales para establecer lazos de colaboración e incrementar la cooperación con la sociedad civil;

8. *Acoge con agrado* la práctica de las instituciones nacionales que se adhieren a los Principios de París de participar de modo conveniente por propio derecho en las reuniones de la Comisión y sus órganos subsidiarios;

9. *También expresa su deseo* de que las instituciones nacionales mantengan la práctica de organizar reuniones regionales en algunas regiones y propongan su organización en otras, y alienta a las instituciones nacionales a organizar reuniones similares con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de sus regiones, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

10. *Afirma* el importante papel que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, en cooperación con otros mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos, en la lucha contra la discriminación racial y las formas conexas de discriminación, así como en la protección y promoción de los derechos humanos de la mujer y los derechos de los grupos especialmente vulnerables, incluidos los niños y las personas con discapacidades, y, en ese contexto, celebra:

a) La participación activa de las instituciones nacionales en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia;

b) La participación de las instituciones nacionales en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad encargado por el Alto Comisionado, y las alienta a contribuir a la labor del Comité Especial establecido de conformidad con la resolución 56/168 de la Asamblea General de 19 de diciembre de 2001;

11. *Señala* la importancia y la constructiva función que pueden desempeñar las instituciones nacionales en la enseñanza de los derechos humanos, entre otras cosas por medio de la publicación y difusión de material de derechos humanos y otras actividades de información pública durante el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004), y pide a todas las instituciones nacionales existentes que desarrollen programas de formación para la enseñanza de los derechos humanos en todos los sectores pertinentes de la sociedad;

12. *Encomia* al Alto Comisionado por la prioridad que ha asignado al establecimiento y fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, entre otras cosas por medio de la cooperación técnica, y pide a la Oficina del Alto Comisionado que siga reforzando su función de coordinación en esta esfera y asignando los recursos necesarios para esa labor recurriendo tanto a fuentes presupuestarias como extrapresupuestarias;

13. *Celebra* en este contexto el establecimiento de un sitio web para las instituciones nacionales ([www.nhri.net](http://www.nhri.net)) que será un importante vehículo para la transmisión de información a las instituciones nacionales y sus asociados y para la difusión de las prácticas óptimas, y toma nota con satisfacción de la intención de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de publicar un compendio de la legislación nacional pertinente a las instituciones nacionales;

14. *Expresa su reconocimiento* a los gobiernos que han aportado recursos adicionales para el establecimiento y fortalecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos;

15. *Celebra* la importante función que tiene el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales, en estrecha cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, de determinar la conformidad con los Principios de París y de ayudar a los gobiernos e instituciones nacionales que lo soliciten a poner en práctica las resoluciones y recomendaciones pertinentes al fortalecimiento de las instituciones nacionales;

16. *Pide* al Secretario General que, con cargo a los recursos disponibles, siga prestando la asistencia necesaria para que el Comité Internacional de Coordinación se reúna durante los períodos de sesiones de la Comisión, bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado y con su cooperación;

17. *Pide también* al Secretario General que siga prestando la asistencia necesaria a las reuniones internacionales y regionales de instituciones nacionales con cargo a los recursos disponibles y al Fondo de las Naciones Unidas de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos;

18. *Acoge con satisfacción* el informe del Secretario General (E/CN.4/2003/110) y le pide que informe a la Comisión en su 60º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

19. *Decide* seguir examinando esta cuestión en su 60º período de sesiones.

*62ª sesión,*  
*25 de abril de 2003.*  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVIII.]

### **2003/77. Situación de los derechos humanos en el Afganistán**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Guiada* por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y las normas humanitarias aceptadas que se estipulan en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales,

*Reafirmando* que todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, y cumplir los compromisos que han asumido libremente en virtud de los instrumentos internacionales,

*Recordando* que el Afganistán es Parte en varios instrumentos internacionales de derechos humanos y tiene la obligación de informar sobre su aplicación,



*Recordando también* las resoluciones y decisiones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos, las resoluciones y declaraciones presidenciales pertinentes del Consejo de Seguridad, los informes del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (S/2002/1299) y sobre las mujeres, la paz y la seguridad (S/2002/1154), y la resolución más reciente aprobada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,

*Recordando además* el Acuerdo sobre las disposiciones provisionales en el Afganistán en espera de que se restablezcan las instituciones permanentes de gobierno, firmado en Bonn el 5 de diciembre de 2001 (el Acuerdo de Bonn),

*Acogiendo con beneplácito* el decreto presidencial que sienta las bases para el establecimiento del ejército nacional del Afganistán como señal del compromiso de la Autoridad de Transición de crear un ejército étnicamente equilibrado, bajo control civil, y subrayando la importancia de aumentar el apoyo para su pronto establecimiento y para el programa de desmovilización en curso, así como para la creación de una fuerza de policía eficiente,

*Celebrando* los esfuerzos de la Autoridad de Transición por restablecer el imperio de la ley en todo el Afganistán, así como la plena protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, e insistiendo en que un entorno seguro, sin violencia, discriminación ni abusos, es fundamental para un proceso de recuperación y reconstrucción viable y sostenible,

*Reiterando* la necesidad de seguridad y libertad de circulación para todo el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, así como todo el personal extranjero y local de las organizaciones humanitarias,

*Reconociendo* el papel fundamental de un poder judicial independiente en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a combatir la impunidad,

1. *Acoge con satisfacción* el informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán (E/CN.4/2003/39), así como el informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre su misión al Afganistán (E/CN.4/2003/3/Add.4), y toma nota de las recomendaciones contenidas en ellos;

2. *Acoge con satisfacción también* la ratificación por el Afganistán de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y reconoce su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e insta a la Autoridad de Transición a que examine como cuestión prioritaria la posibilidad de adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y de ratificar los Convenios N° 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, y N° 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, de la Organización Internacional del Trabajo;

3. *Acoge con satisfacción además* el establecimiento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y de la Comisión Judicial, que desempeñarán un papel fundamental en la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Afganistán;

4. *Alienta* a la Autoridad de Transición y a la comunidad internacional a que proporcionen la ayuda adecuada a estas comisiones para que puedan cumplir sus mandatos de manera puntual, eficaz y compatible con las obligaciones internacionales del Afganistán en materia de derechos humanos;

5. *Celebra* el establecimiento de la Comisión de Redacción de la Constitución y el actual proceso de elaboración de una nueva Constitución, y subraya la importancia de incorporar las obligaciones internacionales del Afganistán en la nueva Constitución, así como la necesidad de velar por la plena participación de las mujeres en todos los procesos previos a la convocación de la loya jirga constitucional y en la propia loya jirga constitucional;

6. *Reconoce* las medidas ya adoptadas por la Autoridad de Transición para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales;

7. *Reconoce* que la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la entrega a la justicia de sus autores, incluidos sus cómplices y colaboradores, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de archivos históricos de esas violaciones y la restitución de la dignidad de las víctimas mediante el reconocimiento y la conmemoración de sus padecimientos constituirán una orientación para las sociedades futuras, y son parte integrante de

la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la prevención de futuras violaciones;

8. *Observa con preocupación* las denuncias de actos de violencia perpetrados por elementos afganos contra ciertos grupos étnicos, desplazados internos y refugiados que han regresado al país, así como los casos de detención y reclusión arbitrarios y de agresiones a mujeres y niñas;

9. *Afirma* que la responsabilidad primordial de la Autoridad de Transición, respaldada por las Naciones Unidas, es establecer un entorno de buena gestión de los asuntos públicos, democracia e imperio de la ley, así como un gobierno de base amplia, sensible a las cuestiones de género, multiétnico y plenamente representativo del pueblo afgano;

10. *Exhorta* a la Autoridad de Transición a que, en aplicación del Acuerdo de Bonn:

a) Siga cooperando plenamente con todos los relatores especiales y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y estudie la posibilidad de extenderles una invitación permanente a visitar el país;

b) Respete cabalmente las obligaciones internacionales del Afganistán en materia de derechos humanos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento, linaje u otra condición;

c) Siga esforzándose por restablecer el imperio de la ley, entre otras cosas colaborando con donantes internacionales para impartir capacitación a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a fin de que se protejan y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, adopte disposiciones para mejorar el acceso a la justicia y aplique medidas para reformar el sistema penitenciario de conformidad con las normas internacionales;

d) Declare una moratoria para la pena de muerte en vista de los defectos de procedimiento y de fondo del sistema judicial afgano, teniendo en cuenta las salvaguardias de las Naciones Unidas para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte;

e) Investigue las denuncias de violaciones de los derechos humanos, en particular de las minorías étnicas, así como de las mujeres y las niñas;

f) Facilite el regreso voluntario y ordenado, así como la reinserción en condiciones de seguridad y dignidad, de los refugiados afganos y de las personas internamente desplazadas;

g) Respete y proteja los derechos humanos de las mujeres y las niñas afganas, entre otras cosas prestando un apoyo adecuado al Ministerio de la Mujer, protegiendo a las mujeres de todas las formas de violencia, garantizándoles igual acceso a la educación y a la atención de salud, abordando el problema de su detención extrajudicial y asegurándoles la plena participación en todas las esferas de la vida afgana;

h) Coopere eficazmente con la comunidad internacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes;

11. *Reconoce* la enorme carga que soportan los países vecinos, especialmente la República Islámica del Irán y el Pakistán, agradece los esfuerzos desplegados en estos países de acogida para aliviar la difícil situación de los refugiados afganos, y alienta a esos países a que sigan cooperando para ello con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

12. *Acoge con satisfacción* las contribuciones de los donantes, los insta a que cumplan puntualmente los compromisos de financiación contraídos en la Conferencia internacional sobre la asistencia para la reconstrucción del Afganistán, celebrada en Tokio el 21 y 22 de enero de 2002, y los invita a que proporcionen recursos adicionales, además de los prometidos en Tokio, y exhorta a la comunidad internacional a que coopere con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y con el Grupo Consultivo sobre Derechos Humanos a fin de integrar los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, y las cuestiones de género en los programas apoyados por donantes;

13. *Elogia* las actividades desarrolladas por la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia al Afganistán, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos de las Naciones Unidas para prestar asistencia al

Afganistán en la aplicación de las disposiciones de derechos humanos del Acuerdo de Bonn, en particular respaldando a la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán;

14. *Insta* a las Naciones Unidas a que presten asistencia a la Autoridad de Transición en la organización y celebración de un proceso electoral digno de crédito, libre y justo, en un entorno seguro, para las elecciones que tendrán lugar en junio de 2004, y pide a los Estados Miembros que proporcionen apoyo financiero y técnico, con inclusión de observadores, para ese proceso;

15. *Pide* al Secretario General:

a) Que vele por que el puesto de Asesor superior en cuestiones de género de la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia al Afganistán se cubra de inmediato y con carácter permanente, a fin de integrar una perspectiva de género en sus actividades;

b) Nombre un experto independiente por un período de un año para que, en estricta colaboración con la Autoridad de Transición, incluida la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán, así como con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia al Afganistán, elabore un programa de servicios de asesoramiento con el fin de asegurar el pleno respeto y protección de los derechos humanos y la promoción del imperio de la ley, y de solicitar y recibir información acerca de la situación de los derechos humanos en el Afganistán e informar al respecto, en un esfuerzo por prevenir las violaciones de los derechos humanos;

16. *Invita* a los órganos competentes de las Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a que, en el marco de la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia al Afganistán:

a) Respalden la plena aplicación de las disposiciones de derechos humanos del Acuerdo de Bonn y el Programa Nacional de Derechos Humanos para el Afganistán, en particular velando por que la promoción y protección de los derechos humanos sean aspectos centrales de los propósitos y funciones de la Misión;

b) Sigam apoyando la labor de la Comisión Independiente de Derechos Humanos;

17. *Invita* al experto independiente que nombrará el Secretario General a que presente, a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos, un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán y sobre los resultados de la asistencia técnica en esa esfera;

18. *Invita* a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer a que siga examinando la situación de las mujeres y las niñas en el Afganistán y presente un informe a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos.

*62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]*

### **2003/78. Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Guiada* por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes,

*Recordando* su resolución 2002/88, de 26 de abril de 2002,

*Teniendo presentes* las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Somalia, de 28 de marzo de 2002 (S/PRST/2002/8), 12 de diciembre de 2002 (S/PRST/2002/35) y 12 de marzo de 2003 (S/PRST/2003/2), el informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, de 28 de febrero de 2003 (S/2003/231), las resoluciones del Consejo 1407 (2002), 1425 (2002) y 1474 (2003), de 3 de mayo de 2002, 22 de julio de 2002 y 8 de abril de 2003, respectivamente, 1265 (1999), de 17 de diciembre de 1999, sobre la protección de los civiles durante los conflictos armados, y 1460 (2003), de 30 de enero de 2003, sobre la utilización de niños en conflictos armados, el informe del Secretario General sobre la protección de la asistencia humanitaria a refugiados y otros que se encuentren en situaciones de conflicto (S/1998/883), la resolución 54/192 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1999, titulada "Seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección del personal de

las Naciones Unidas", y los Principios Rectores de los desplazamientos internos (E/CN.4/1998/53/Add.2, anexo),

*Recordando* la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Somalia, de 12 de marzo de 2003 (S/PRST/2003/2), en la que el Consejo reafirmó su empeño en hallar una solución completa y duradera de la situación en Somalia y su respeto de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad del país, de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas,

*Acogiendo complacida* el establecimiento de un grupo de expertos, de conformidad con las resoluciones 1425 (2002) y 1474 (2003) del Consejo de Seguridad, y su mandato de generar información independiente sobre las infracciones del embargo de armas impuesto en virtud del párrafo 5 de la resolución 733 (1992) del Consejo como medio de hacerlo efectivo y reforzarlo,

*Recordando* la resolución 751 (1992) del Consejo de Seguridad, de 24 de abril de 1992, relativa a la situación en Somalia,

*Reconociendo* que el pueblo de Somalia es el principal responsable del proceso de reconciliación nacional y es el que debe decidir libremente sus sistemas político, económico y social,

*Tomando nota con reconocimiento* de la conclusión de la primera fase del proceso de reconciliación nacional en Somalia con la firma de la Declaración de Eldoret el 27 de octubre de 2002 y el inicio de la segunda fase del proceso de reconciliación en noviembre de 2002,

*Tomando nota también con reconocimiento* de los esfuerzos en favor de la paz realizados por las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga de los Estados Árabes, la Unión Europea, la Organización de la Conferencia Islámica, el Movimiento de los Países No Alineados, el Foro de Miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD),

*Expresando satisfacción* porque, pese a todas las dificultades, la población de las regiones septentrionales de Somalia sigue disfrutando de una paz y estabilidad relativas, así como del suministro de servicios básicos,

*Considerando* que la comunidad internacional no debe abandonar al pueblo de Somalia y que los derechos humanos deben incorporarse en el programa de conversaciones sobre el futuro de Somalia,

*Subrayando* que los esfuerzos para luchar contra el terrorismo en Somalia son inseparables del establecimiento de la paz y una buena gestión de los asuntos públicos en el país,

*Poniendo de relieve* los progresos realizados y los esfuerzos cada vez mayores desplegados por los organismos especializados y los programas de las Naciones Unidas para mejorar las condiciones de vida de la población de Somalia,

*Poniendo de relieve también* la valiosa labor llevada a cabo en la esfera humanitaria por grupos de la sociedad civil somalí y organizaciones no gubernamentales, entre ellas las organizaciones humanitarias, en sus esfuerzos por fomentar y proteger los derechos humanos,

*Reconociendo* los problemas masivos con que se enfrenta Somalia en relación con la asistencia inmediata, así como con la reconstrucción y el desarrollo,

*Observando con preocupación* que sigue reinando la inseguridad en varias partes de Somalia y observando con inquietud que han surgido conflictos en algunas zonas del país, últimamente en Mogadishu y Baidoa,

*Observando también con preocupación* que la situación humanitaria sigue siendo precaria en toda Somalia,

*Observando con preocupación además* que el deterioro de la situación política y en materia de seguridad tiene consecuencias muy negativas en la promoción y protección de los derechos humanos,

*Acogiendo con beneplácito* la declaración más reciente del Presidente del Consejo de Seguridad, de 12 de marzo de 2003 (S/PRST/2003/2), incluida la petición al Secretario General de que prosiga, de manera coherente, las actividades preparatorias sobre el terreno de una misión amplia de consolidación de la paz después del conflicto en Somalia, que deberá llevarse a cabo cuando las condiciones de seguridad lo permitan, como se estipula en la declaración del



Presidente del Consejo de Seguridad de 28 de marzo de 2002 (S/PRST/2002/8), y en la cual se procurará luchar contra la pobreza y fortalecer las instituciones públicas,

*Considerando* que la asistencia humanitaria, en materia de derechos humanos y para el desarrollo es de máxima importancia para contribuir a la mitigación de la pobreza, promover una sociedad más pacífica, equitativa y democrática en Somalia y respaldar un mejoramiento sostenible de los medios de subsistencia de la población somalí y un mejor acceso a los servicios públicos y sociales básicos, así como el establecimiento de una buena gestión pública,

*Reafirmando su pleno apoyo* al proceso de paz patrocinado por la IGAD y su compromiso de hacer avanzar el proceso de paz,

*Elogiando* al Gobierno de Kenya por el papel decisivo que ha desempeñado en la facilitación del proceso de reconciliación nacional en Somalia,

*Subrayando* que el proceso de paz en Somalia debe continuar y completarse mediante el diálogo y no recurriendo al empleo de la fuerza,

1. *Acoge con satisfacción:*

a) La conclusión de la primera fase del proceso de reconciliación nacional en Somalia, que terminó con la firma de la Declaración de Eldoret el 27 de octubre de 2002, en la que los participantes se comprometieron a poner fin a las hostilidades y a garantizar la seguridad de todo el personal de asistencia humanitaria y de desarrollo y de sus instalaciones;

b) Los esfuerzos desplegados por el Comité Técnico de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y, en particular, los efectos positivos de las consultas de los Estados de primera línea (Djibouti, Etiopía y Kenya) sobre el proceso de reconciliación celebradas en Addis Abeba el 2 de febrero de 2003;

c) La decisión del Comité Técnico de la IGAD, que está integrado por los tres Estados de primera línea, a crear, con efecto inmediato, un comité de representantes de la IGAD y asociados internacionales encargado de vigilar las violaciones de la Declaración sobre la cesación de las hostilidades y el cumplimiento de la Declaración de Eldoret;

d) La integración de las cuestiones de derechos humanos en los programas de varios organismos de las Naciones Unidas;

e) El establecimiento de un grupo de contacto para Somalia tanto en Nairobi como en Nueva York;

f) La decisión de reactivar el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, mediante el establecimiento de un mecanismo concreto para su aplicación a más tardar el 30 de abril de 2002;

2. *Pone de relieve* la necesidad de desplegar esfuerzos para combatir el terrorismo internacional de conformidad con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, de 28 de septiembre de 2001, e insta a todos los Estados y a los organismos internacionales pertinentes a que presten asistencia a Somalia para la aplicación de esa resolución;

3. *Expresa el convencimiento* de que el proceso de reconciliación nacional contribuirá a poner fin al sufrimiento de la población de Somalia;

4. *Alienta:*

a) A la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y a su Comité Técnico a que hagan avanzar el proceso de paz y sigan desempeñando su activo y positivo papel en apoyo del proceso de reconciliación;

b) A todas las partes en Somalia a que participen en el proceso, que ofrece una oportunidad excepcional a todos los somalíes para poner fin al sufrimiento de la población y restablecer la paz y la estabilidad en el país;

c) A todos los Estados, por medio del Foro de Miembros de la IGAD, a que desempeñen una función activa y positiva en apoyo del proceso de reconciliación;

5. *Expresa profunda preocupación* por las informaciones sobre violaciones, ejecuciones sumarias y arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violencia, en particular contra las mujeres y los niños, así como por la falta de un sistema judicial eficaz, indispensable para garantizar el derecho a un juicio imparcial de conformidad con las

normas internacionales, y toma nota de la necesidad de que se lleve a cabo una investigación adecuada en toda Somalia con el fin de llevar a los autores ante los tribunales;

6. *Condena:*

a) Las graves violaciones del compromiso contraído por las partes el 27 de octubre de 2002 que aún se están produciendo;

b) Las actuales violaciones y atropellos generalizados de los derechos humanos y del derecho humanitario, en particular contra los desplazados internos, las minorías, los grupos vulnerables, las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica, la práctica persistente de la mutilación genital femenina, que sigue siendo motivo de grave preocupación, así como el desplazamiento forzado de civiles;

c) Todas las violaciones del derecho humanitario internacional y la normativa de derechos humanos, en particular el reclutamiento forzado u obligatorio de niños para su utilización en los conflictos armados, la utilización de esos niños por las milicias en los conflictos armados, el recurso al trabajo infantil, especialmente en el medio familiar, y un sistema de justicia juvenil no acorde con las normas internacionales;

d) Todos los actos de violencia, tales como la toma de rehenes, los secuestros y los asesinatos, entre otros de personal de socorro humanitario y personal de organismos de las Naciones Unidas;

7. *Subraya:*

a) El apoyo prestado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante la designación de un asesor superior de derechos humanos encargado de integrar los derechos humanos en la labor de los organismos de las Naciones Unidas en Somalia y proporcionar asesoramiento técnico sobre la ejecución del Programa para la Protección Civil de Somalia, establecido en Nairobi en el marco de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador de la Asistencia Humanitaria para Somalia, y alienta al oficial de derechos humanos a que siga prestando su valiosa asistencia a la población de Somalia mediante el cumplimiento de su mandato;

b) La necesidad de que los derechos humanos formen parte integrante de la futura misión de las Naciones Unidas de consolidación de la paz en Somalia;

c) La necesidad de incorporar una perspectiva de género en todos los procesos de consolidación de la paz, reconstrucción y reconciliación;

8. *Exhorta:*

a) A todas las partes en Somalia a que reafirmen su compromiso de dialogar con el objetivo de ampliar y profundizar el proceso de reconciliación nacional y a que respeten y cumplan prontamente la decisión adoptada durante el proceso, en particular la Declaración sobre la cesación de las hostilidades y los acuerdos relativos al restablecimiento de la seguridad y la reapertura del aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Mogadishu;

b) A todos los signatarios de la Declaración sobre la cesación de las hostilidades a que sigan participando plenamente en las negociaciones de paz con miras a lograr resultados concretos en breve;

c) A todas las partes a que pongan fin a todos los actos de violencia, se abstengan de participar en las hostilidades y eviten todo acto que pueda aumentar la tensión durante las negociaciones de paz;

d) A todos los Estados y otros agentes a que cumplan escrupulosamente el embargo de armas impuesto en virtud de la resolución 733 (1992) del Consejo de Seguridad y sigan colaborando estrechamente con los mecanismos establecidos para aplicar ese embargo;

e) A todos los Estados Miembros y otros agentes con los que se ha establecido contacto fuera de la región a que cooperen plenamente con el grupo de expertos encargado de reunir información sobre el embargo, de conformidad con la resolución 1425 (2002) del Consejo y el artículo 2.5 de la Declaración de Eldoret;

f) A todos los Estados, en particular los de la región, a que no interfieran en los asuntos internos de Somalia; dicha injerencia sólo contribuye a desestabilizar aún más a Somalia y a crear un ambiente de temor, tiene efectos negativos en los derechos humanos y podría poner en

peligro la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Somalia; el territorio de Somalia no debe utilizarse para minar la estabilidad de la subregión;

*g)* A todos los Estados a que impidan a las personas y entidades que se aprovechen de la situación de Somalia para financiar, planificar, facilitar, apoyar o cometer actos terroristas desde el país, destacando que los esfuerzos para combatir el terrorismo en Somalia son indisociables del establecimiento de la paz y de la buena gestión pública en el país;

*h)* A todos los Estados a que presten asistencia a Somalia para lograr una aplicación más cabal y completa de la resolución 1373 (2001) del Consejo;

*i)* A todos los Estados a que se comprometan a alcanzar el objetivo a largo plazo de la estabilidad regional, entre otras cosas desempeñando una función positiva en el proceso de reconstrucción de las instituciones nacionales en Somalia;

*j)* A las organizaciones regionales e internacionales y a los países interesados, a que continúen intensificando sus esfuerzos coordinados para facilitar el proceso de reconciliación nacional en Somalia, conscientes de que la convivencia pacífica de todas las partes y grupos es una base fundamental para el respeto de los derechos humanos;

*k)* A todas las partes en Somalia a que respeten los derechos humanos y las normas humanitarias internacionales contenidas en los instrumentos internacionales, especialmente las relativas a los conflictos armados internos;

*l)* A todas las partes en Somalia a que protejan y faciliten la labor del personal de las Naciones Unidas, el personal encargado de prestar asistencia humanitaria, los defensores de los derechos humanos y los representantes de las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación internacionales, y a que garanticen a todas las personas que desarrollan una actividad humanitaria la libertad de circulación en todo el país y el acceso seguro e irrestricto a la población civil que necesite protección y asistencia humanitaria;

*m)* A todos los Estados, organizaciones regionales e internacionales y otros agentes a que apoyen una mayor presencia sobre el terreno y una mayor independencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Somalia, al mismo

tiempo que mantiene una estrecha colaboración con otros organismos que se ocupan de los derechos humanos;

*n)* A todas las autoridades pertinentes y a los Estados Miembros a que apoyen el retorno voluntario y la reintegración de los refugiados somalíes y la prestación de asistencia humanitaria urgente a los desplazados internos y la protección de éstos;

*o)* A todos los Estados Miembros a que sigan aumentando la asistencia que prestan en respuesta a los llamamientos de las Naciones Unidas en pro de la labor de socorro, rehabilitación y reconstrucción en todas las regiones, en particular la labor destinada a fortalecer la sociedad civil, alentar la buena gestión de los asuntos públicos y el restablecimiento del estado de derecho, y a que apoyen el desarrollo de una cultura de derechos humanos y otras actividades de la Oficina del Alto Comisionado referentes a Somalia;

*p)* A las Naciones Unidas, a sus Estados Miembros y organismos especializados, a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones de Bretton Woods a que intensifiquen su asistencia, en particular en las esferas de los derechos humanos, los derechos de la mujer y la igualdad entre los sexos, la salud (prestando especial atención a la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y otras enfermedades transmisibles), la desmovilización de la milicia, el desarme, la lucha contra la proliferación de las armas de pequeño calibre, la remoción de minas y la rehabilitación de la infraestructura básica;

*q)* A las Naciones Unidas, a sus Estados Miembros y organismos especializados, a que apoyen plenamente y presten asistencia a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en la aplicación de sus decisiones sobre Somalia, que constituyen un acontecimiento importante para el proceso de paz en el país;

*r)* A las Naciones Unidas y a sus Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para reforzar la iniciativa de paz de la IGAD, adoptando medidas concretas, tales como sanciones selectivas contra las personas que obstaculicen el proceso de reconciliación e incentivos positivos, incluido un apoyo financiero puntual;

s) A las Naciones Unidas y a sus Estados Miembros a que apoyen los esfuerzos que la Unión Africana despliegue para lograr el efectivo establecimiento de un mecanismo de vigilancia de la aplicación de la Declaración sobre la cesación de las hostilidades;

t) A los distintos países donantes, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales, a que sigan incluyendo los principios y objetivos de derechos humanos en la labor humanitaria y de desarrollo que realizan en Somalia, y a que cooperen con el experto independiente de la Comisión;

9. *Encomia* la labor realizada por el experto independiente y acoge complacida su informe (E/CN.4/2003/115);

10. *Invita* a los gobiernos y a las organizaciones que estén en condiciones de hacerlo a que respondan favorablemente a las solicitudes de asistencia del Secretario General para la aplicación de la presente resolución;

11. *Pide* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tome las disposiciones necesarias para que la presente resolución, acompañada de la correspondiente nota explicativa, se traduzca al idioma somalí, y para que el oficial de derechos humanos para Somalia establecido en Nairobi la difunda ampliamente en el país;

12. *Decide*:

a) Prorrogar por otro año el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia y pide que el experto independiente informe al respecto a la Comisión en su 60º período de sesiones;

b) Pedir al Secretario General que siga prestando al experto independiente toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato y que proporcione recursos suficientes, con cargo a los recursos generales de las Naciones Unidas, para financiar las actividades que realicen el experto independiente y el Alto Comisionado a fin de prestar servicios de asesoramiento y cooperación técnica;

c) Seguir examinando esta cuestión en su 60º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa;

13. *Recomienda* al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente proyecto de decisión:

"El Consejo Económico y Social, tomando nota de la resolución 2003/78 de la Comisión de Derechos Humanos, de 25 de abril de 2003, aprueba la decisión de la Comisión de prorrogar por otro año el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia y su petición al experto independiente de que presente un informe a la Comisión en su 60º período de sesiones. También hace suyas las peticiones dirigidas al Secretario General por la Comisión de que siga prestando al experto independiente toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato y que le proporcione recursos suficientes, con cargo a los recursos generales de las Naciones Unidas, para financiar las actividades que realicen el experto independiente y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica."

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]

### **2003/79. Situación de los derechos humanos en Camboya**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Recordando* su resolución 2002/89 de 26 de abril de 2002, la resolución 57/225 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2002, y las resoluciones anteriores pertinentes,

*Reconociendo* que la trágica historia de Camboya requiere la adopción de medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población e impedir que se vuelva a la política y las prácticas del pasado, tal como se estipuló en el Acuerdo sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya, firmado en París el 23 de octubre de 1991,

#### **I. Apoyo de las Naciones Unidas y cooperación con ellas**

1. *Pide* al Secretario General que, por medio de su Representante Especial encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya y en colaboración con la Oficina del



Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya, preste asistencia al Gobierno de ese país para garantizar la protección de los derechos humanos de todo su pueblo y proporcione recursos suficientes para seguir manteniendo en Camboya la presencia operacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para que el Representante Especial pueda seguir desempeñando eficazmente sus funciones;

2. *Acoge con satisfacción* el informe del Secretario General sobre la función y logros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la prestación de asistencia al Gobierno y al pueblo de Camboya para la promoción y protección de los derechos humanos (E/CN.4/2003/113), el informe del Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Camboya (E/CN.4/2003/114) y la utilización del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para un programa de educación en materia de derechos humanos en Camboya con objeto de financiar el programa de actividades de la Oficina, e invita a la comunidad internacional a que considere la posibilidad de hacer contribuciones al Fondo Fiduciario;

3. *Alienta* al Gobierno de Camboya a que continúe cooperando con la Oficina y con otros organismos de las Naciones Unidas en sus esfuerzos conjuntos por promover los derechos humanos;

## **II. Función de las organizaciones no gubernamentales**

4. *Encomia* el papel esencial que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en Camboya, entre otras cosas en materia de educación sobre los derechos humanos y de capacitación en el desarrollo de la sociedad civil, y alienta al Gobierno a que siga velando por la protección de esas organizaciones de derechos humanos y su personal, y siga colaborando estrechamente y cooperando con ellas;

## **III. Reforma administrativa, legislativa y judicial**

5. *Observa con preocupación* que persisten los problemas relacionados con el estado de derecho y el funcionamiento del poder judicial como resultado, entre otras cosas, de la corrupción y de la injerencia del poder ejecutivo en la independencia de los jueces, e insta al

Gobierno a que acelere la reforma legislativa y judicial, entre otras cosas aprobando definitivamente las leyes y códigos que constituyen componentes esenciales del marco jurídico básico, en particular el estatuto de los magistrados y fiscales, una ley sobre la organización y funcionamiento de los tribunales de justicia y una ley contra la corrupción, y garantizando la independencia, imparcialidad y eficacia del Consejo Supremo de la Magistratura y del sistema judicial en su totalidad;

6. *Acoge complacida* los proyectos de código penal, código de procedimiento penal, código civil y código de procedimiento civil, y el aumento de los sueldos y prestaciones de los jueces y fiscales, e insta al Gobierno a que mejore la formación de los jueces y abogados por medio de la Real Escuela de la Magistratura y del Centro para el Perfeccionamiento Profesional y la Formación de Abogados del Colegio de Abogados del Reino de Camboya;

7. *Insta* al Gobierno de Camboya a que redoble sus esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la tierra gracias a una mejor transparencia, dando gran prioridad al proyecto de reforma de la gestión y administración de la tierra y llevando a cabo un examen de todos los contratos de concesión de tierras y su aplicación, y observa con preocupación los restantes problemas de apropiación de tierras, desalojos forzosos y nuevos desplazamientos;

8. *Alienta* nuevos esfuerzos por parte del Gobierno de Camboya para aplicar rápida y eficazmente su programa de reformas, incluido el Plan de Acción de Gobierno y las reformas en el ámbito militar, entre otras, el programa de desmovilización;

9. *Acoge con satisfacción* los progresos realizados por el Gobierno de Camboya en la labor de erradicar las minas terrestres antipersonal y reducir el número de armas pequeñas en el país, y alienta al Gobierno y a la comunidad internacional a que sigan tomando medidas para resolver esas cuestiones;

10. *Expresa honda preocupación* por la situación de impunidad que sigue existiendo en Camboya, reconoce algunas medidas adoptadas por el Gobierno para enjuiciar a quienes hayan cometido transgresiones, y exhorta al Gobierno a que, como cuestión de absoluta prioridad, aumente sus esfuerzos para investigar con urgencia y enjuiciar, con las debidas garantías procesales y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, a quienes hayan cometido delitos graves, incluidas las violaciones de los derechos humanos;

11. *Alienta* al Gobierno de Camboya a que tome disposiciones para celebrar de forma pacífica elecciones generales libres y limpias en julio de 2003, a que investigue a fondo los incidentes de intimidación, violencia y muertes registrados en el pasado, y las informaciones acerca de la compra de votos, y a que procese a sus autores, a que garantice que no se registren problemas similares en las elecciones generales y, en particular, a que preste gran atención a la seguridad y la protección de los candidatos y militantes políticos y asegure la neutralidad de las instituciones del Estado, estableciendo un comité electoral nacional independiente, haciendo que dicho comité y la magistratura de Camboya hagan cumplir adecuadamente la ley, y dando acceso equitativo a todos los partidos a todos los medios de información, incluidos los de la radio y televisión del Estado;

12. *Observa con profunda preocupación* las condiciones penitenciarias existentes en Camboya, observa con interés que se han tomado algunas importantes iniciativas para mejorar el sistema penitenciario, recomienda que se siga prestando asistencia internacional para mejorar las condiciones físicas de reclusión y exhorta el Gobierno de Camboya a que siga adoptando medidas para mejorar esas condiciones, incluida la posibilidad de introducir condenas no privativas de libertad como alternativas a la prisión, a proporcionar alimentación y atención de salud adecuadas a los presos y detenidos, a atender las necesidades especiales de las mujeres y los niños, y a restablecer el acceso de los abogados, los familiares y las organizaciones de derechos humanos a las prisiones y los internos, de conformidad con la reglamentación pertinente en vigor;

#### **IV. Violaciones de los derechos humanos y violencia**

13. *Expresa profunda preocupación* por las persistentes violaciones de los derechos humanos, entre ellos torturas, excesiva duración de la detención preventiva, violación de los derechos laborales y desalojos forzosos, así como por la violencia política, entre otras cosas la muerte violenta de militantes políticos, la participación de la policía y personal militar en actos de violencia y la evidente falta de protección contra linchamientos, aunque observa que el Gobierno de Camboya ha hecho algunos progresos a este respecto y lo insta a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir esas violaciones, entre otras cosas examinando la posibilidad de establecer un órgano independiente de investigación sobre la cuestión de los linchamientos;

14. *Insta* al Gobierno de Camboya a que adopte todas las medidas necesarias para evitar la violencia racial contra miembros de cualquier grupo étnico, a que luche contra todas las manifestaciones de discriminación contra esas minorías y proteja sus derechos, y a que cumpla sus obligaciones en su calidad de Parte en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otras cosas solicitando asistencia técnica;

## **V. Tribunal para los Jemeres Rojos**

15. *Reafirma* que las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia reciente de Camboya fueron cometidas por los jemeres rojos y reconoce que su desintegración definitiva y la labor constante del Gobierno de Camboya han sentado las bases para restablecer la paz y la estabilidad con el fin de lograr la reconciliación nacional en Camboya y la investigación y el procesamiento de los dirigentes de aquella organización;

16. *Acoge complacida* los esfuerzos encaminados a concertar un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya para establecer salas de justicia especiales con el fin de juzgar, de conformidad con las normas internacionales de justicia, equidad y las debidas garantías procesales, a los responsables más destacados de los crímenes y graves violaciones del derecho penal de Camboya, la práctica y el derecho humanitario internacional y las convenciones internacionales reconocidas por Camboya, cometidos durante la época de la Kampuchea Democrática;

## **VI. Protección de las mujeres y los niños**

17. *Acoge con satisfacción* los esfuerzos y progresos registrados en la tarea de mejorar la condición de la mujer e insta al Gobierno de Camboya a que adopte nuevas medidas adecuadas para combatir la violencia contra la mujer en todas sus formas y todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben como Parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluso solicitando asistencia técnica;

18. *Elogia* los esfuerzos del Gobierno de Camboya para impedir la propagación del VIH/SIDA, y lo alienta a que continúe centrándose en este problema;

19. *Acoge con satisfacción* la serie de medidas que ha adoptado el Gobierno de Camboya para luchar contra la trata de personas, aunque observa con profunda preocupación el creciente fenómeno de la trata internacional de mujeres y niños y su explotación sexual, y pide al Gobierno y a la comunidad internacional que adopten medidas concertadas para hacer frente cabalmente a esos problemas;

20. *Observa con profunda preocupación* el problema del trabajo infantil en sus peores formas, insta al Gobierno de Camboya a que adopte de inmediato medidas efectivas para proteger a los niños de la explotación económica y de realizar cualquier trabajo que sea probable que resulte peligroso, entorpezca su educación o resulte nocivo para su salud, seguridad o moral, haciendo cumplir las leyes de Camboya sobre el trabajo infantil, las leyes laborales vigentes y las leyes contra la trata y en favor de la infancia y procesando a quienes las infrinjan, invita a la Organización Internacional del Trabajo a que siga prestando la asistencia necesaria a este respecto y alienta al Gobierno a que considere la posibilidad de ratificar el Convenio de 1999 (Nº 182) de dicha Organización sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación;

21. *Acoge con satisfacción* el aumento de la asignación presupuestaria en las esferas de la educación y la salud, y alienta su oportuno desembolso y ulteriores esfuerzos del Gobierno de Camboya para mejorar las condiciones de salud de los niños y su acceso a la educación, promover un registro de nacimientos gratuito y accesible, y establecer un sistema de justicia de menores;

## **VII. Conclusión**

22. *Alienta* a la comunidad internacional a que preste asistencia al Gobierno de Camboya para aplicar la presente resolución;

23. *Pide* al Secretario General que le presente en su 60º período de sesiones un informe sobre la función y logros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la labor de asistencia al Gobierno y al pueblo de Camboya para promover y proteger los derechos humanos, y sobre las recomendaciones formuladas por el Representante Especial acerca de las cuestiones comprendidas en su mandato;

24. *Decide* seguir examinando la situación de los derechos humanos en Camboya en su 60º período de sesiones en relación con el tema titulado "Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos".

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]

### **2003/80. Situación de los derechos humanos en Sierra Leona**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Reafirmando* que todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables de derechos humanos,

*Recordando* sus resoluciones anteriores sobre la situación de los derechos humanos en Sierra Leona, así como las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1470 (2003) de 28 de marzo de 2003,

*Recordando con profundo pesar* las violaciones e infracciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se han cometido en Sierra Leona contra civiles, tales como el secuestro de mujeres y niños así como por la selección de mujeres y niñas como objetivo y los abusos a que han sido sometidas durante el conflicto,

*Acogiendo con satisfacción*, a este respecto, las primeras actas de acusación del Tribunal Especial para Sierra Leona contra personas acusadas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras infracciones graves del derecho humanitario, así como el comienzo de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación,

*Acogiendo con satisfacción* que se desarrollaran pacíficamente las elecciones generales y presidenciales que tuvieron lugar en Sierra Leona en mayo de 2002 y la elección de los jefes supremos durante el mismo año, y tomando nota de los preparativos de las próximas elecciones de los consejos de distrito y municipales,

*Acogiendo con satisfacción* el retorno voluntario de muchos refugiados de Sierra Leona procedentes de Guinea y de Liberia y de desplazados internos a sus comunidades, y así como la conclusión del programa de reasentamiento para los desplazados internos y el cierre de los campamentos de las provincias,

*Expresando su preocupación* por las posibles repercusiones humanitarias que la situación en la Unión del Río Mano y en Côte d'Ivoire pueden tener para la región y para los avances que se han hecho en Sierra Leona,

*Reafirmando* que muchos refugiados y personas afectadas por la guerra siguen necesitando protección y asistencia, y teniendo presente que la inestabilidad en la Unión del Río Mano y en Côte d'Ivoire sigue generando desplazamientos,

*Reconociendo* que el Manifiesto por los Derechos Humanos de Sierra Leona, de 24 de junio de 1999, contiene un marco básico importante para la promoción de los derechos humanos y alentando a que se prosiga su aplicación así como a la creación en el futuro de una comisión nacional independiente de derechos humanos,

*Reconociendo* la importancia de la cooperación técnica para la promoción y la protección de los derechos humanos, que ayudará a alcanzar la estabilidad y la seguridad en Sierra Leona,

1. *Acoge con satisfacción:*

a) El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/CN.4/2003/35), en particular su conclusión de que se han hecho gigantescos progresos en la aplicación del proceso de paz en Sierra Leona;

b) El informe del Alto Comisionado a la Asamblea General (A/57/284);

c) Las actividades de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona, en particular la labor de su Sección de Derechos Humanos;

d) La labor en curso del Tribunal Especial para Sierra Leona para llevar ante la justicia a las personas con mayores responsabilidades por la comisión de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras infracciones graves del derecho internacional humanitario, así

como delitos con arreglo a las leyes correspondientes de Sierra Leona dentro del territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996;

*e)* La labor en curso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para, entre otras cosas, abordar el problema de la impunidad y la rendición de cuentas y promover el restablecimiento del país tras el conflicto armado que se produjo en Sierra Leona de 1991 a 1999;

*f)* Las medidas adoptadas por el Gobierno de Sierra Leona para extender su autoridad en todo el país, pero observa con preocupación que sigue enfrentándose a graves limitaciones de recursos y de otro tipo para restaurar la administración civil a todos los niveles y los servicios públicos en todo el país;

*g)* La decisión del Gobierno de Sierra Leona de cursar una invitación permanente a todos los mecanismos especiales de la Comisión;

*h)* La asistencia del Alto Comisionado y la comunidad internacional al Gobierno de Sierra Leona con el fin de promover la cultura de la protección de los derechos humanos en Sierra Leona, así como actividades con todas las Partes que han tomado parte en el conflicto;

*i)* Las iniciativas y medidas adoptadas por el Gobierno y la sociedad civil de Sierra Leona, conjuntamente con la comunidad internacional, para crear una infraestructura de derechos humanos en el país, en particular las relacionadas con la sensibilización de las comunidades acerca de los objetivos del Tribunal Especial y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y reitera que es necesario seguir haciendo esfuerzos en este sentido para promover la paz, la justicia y la reconciliación nacional y fomentar la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos;

*j)* Las contribuciones voluntarias ya aportadas y las promesas hechas al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Tribunal Especial, y acoge también con satisfacción el empleo, por parte del Tribunal Especial, de expertos en delitos basados en el género;

*k)* La labor realizada por la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, junto con los organismos participantes, para seguir facilitando la reintegración y la reconciliación dentro de la sociedad de Sierra Leona;



*l)* La capacitación en materia de derechos humanos, en particular la especializada en cuestiones de género y de derechos del niño, destinada a supervisores nacionales de derechos humanos, agentes de policía y personal militar;

*m)* La labor en curso de la Comisión Nacional para los Niños Afectados por la Guerra;

*n)* Que se sigan asignando a la Misión asesores sobre protección de menores, y los esfuerzos de éstos para ayudar a velar por la protección de los derechos del niño, que es prioritaria en todo el proceso de mantenimiento de la paz y en la consolidación de la paz en Sierra Leona, así como los esfuerzos realizados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para atender a las necesidades de protección y asistencia de los niños;

*o)* Las actividades realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, especialmente las relacionadas con la promoción del respeto del derecho internacional humanitario, en las esferas de la asistencia médica, las actividades de socorro y las visitas a las personas detenidas, y los esfuerzos de otras organizaciones humanitarias, así como de los organismos de las Naciones Unidas, para rehabilitar la infraestructura del país con miras a hacer posibles el reasentamiento y la reintegración de los desplazados internos y los refugiados que regresan;

2. *Expresa su profunda preocupación:*

*a)* Porque persiste el déficit financiero del Fondo Fiduciario de múltiples donantes para el programa de desarme, desmovilización y reintegración, en particular sus repercusiones en la fase de reintegración del programa;

*b)* Por el alto número de niñas y mujeres que están todavía retenidas por ex combatientes contra su voluntad;

*c)* Por los continuos informes sobre el tráfico y suministro ilegal de armas pequeñas y material conexo, especialmente a través de las fronteras internacionales de la subregión, en contravención de las resoluciones del Consejo de Seguridad a este respecto;

*d)* Por los informes sobre el uso de niños en las actividades de extracción de diamantes;

e) Por la situación humanitaria que afecta a la población, incluidos los refugiados y los desplazados internos en Sierra Leona y los Estados vecinos, a causa de las recientes y continuas violencias y tensiones en las regiones fronterizas, y ante los impedimentos que se oponen al regreso voluntario y en condiciones de seguridad de las poblaciones afectadas a sus hogares en la región fronteriza con Liberia;

3. *Insta:*

a) A todas las partes interesadas de Sierra Leona, incluida la sociedad civil, a que sigan colaborando con el Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación;

b) A todas las partes interesadas de la región a que sigan esforzándose por crear las condiciones que permitan el regreso voluntario y en condiciones de seguridad de las poblaciones desplazadas y refugiadas a sus hogares, y a que velen por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del derecho internacional humanitario;

c) A todos los Estados de la subregión del Río Mano a que cooperen con el Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a que trabajen constructivamente para la consolidación de la paz y la seguridad en Sierra Leona;

d) A la comunidad internacional, así como a los órganos competentes de las Naciones Unidas, a que aporten los recursos necesarios para evitar el déficit en el presupuesto del Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, inclusive para realizar investigaciones;

4. *Insta al Gobierno de Sierra Leona:*

a) A que continúe colaborando estrechamente y fortaleciendo su cooperación en la esfera de los derechos humanos con la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

b) A que continúe esforzándose por reintegrar al resto de los ex combatientes en todas las zonas, y a que en el proceso de reinserción preste atención especial a los niños y las mujeres ex combatientes, teniendo en cuenta las necesidades especiales y la particular vulnerabilidad de las niñas;

c) A que vele por que se den las condiciones necesarias para que las mujeres y las niñas a quienes se impusieron relaciones conyugales o de otra índole durante el conflicto y las demás niñas retenidas contra su voluntad por ex combatientes sean puestas inmediatamente en libertad si así lo desean;

d) A que continúe facilitando el funcionamiento eficaz de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión para los Niños Afectados por la Guerra;

e) A que preste atención prioritaria, en cooperación con la comunidad internacional, a las necesidades especiales de las víctimas mutiladas y de las mujeres y de los niños que están al cuidado del Gobierno, en particular las víctimas de abusos sexuales, los gravemente traumatizados y los desplazados a consecuencia del conflicto;

f) A que siga esforzándose por restablecer la autoridad civil y prestar los servicios sociales y públicos básicos, incluidos los de seguridad y administración de justicia, en toda Sierra Leona;

g) A que continúe estimulando la cooperación de la sociedad civil de Sierra Leona en el funcionamiento del Tribunal Especial y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación;

5. *Decide:*

a) Renovar su petición al Alto Comisionado y a la comunidad internacional de que continúen prestando asistencia al Gobierno de Sierra Leona para el mantenimiento y funcionamiento eficaz de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y que cooperen con el Tribunal Especial;

b) Pedir a la comunidad internacional que siga participando en particular mediante la asistencia técnica, en el fortalecimiento de los tribunales y el sistema judicial de Sierra Leona, así como del sistema de justicia de menores, y que contribuya al establecimiento de la comisión nacional de derechos humanos;

c) Instar a la comunidad internacional a que responda a los llamamientos que han hecho el Secretario General y la Oficina del Alto Comisionado respectivamente, y a que aporte los fondos necesarios para financiar plenamente el presupuesto de la Comisión de la Verdad y la

Reconciliación y el Tribunal Especial, y pedir al Gobierno de Sierra Leona que recabe activamente los fondos que se necesitan urgentemente;

*d)* Pedir al Secretario General que adopte todas las medidas necesarias para facilitar las actividades del Tribunal Especial, incluidas las que realice el Comité de Gestión;

*e)* Pedir al Alto Comisionado y a la comunidad internacional que pongan a disposición del Tribunal Especial y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la asistencia técnica complementaria que sea necesaria;

*f)* Pedir al Secretario General, al Alto Comisionado y a la comunidad internacional que sigan prestando toda la asistencia que sea necesaria a la Sección de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona, así como para mantener el grado de integración de la Sección en la labor de la Misión, a fin de que pueda desempeñar su mandato de informar sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos ocurridas en Sierra Leona, y que, en consulta con los organismos competentes de las Naciones Unidas, presten asistencia al Gobierno de Sierra Leona en sus esfuerzos por atender las necesidades del país en materia de derechos humanos, entre otras cosas mediante:

- i)* El fortalecimiento de su participación en los programas de cooperación técnica, los servicios de asesoramiento y los programas de promoción de los derechos humanos;
- ii)* El fortalecimiento de su apoyo a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros grupos que se ocupan de los derechos humanos en Sierra Leona, y la continuación y ampliación de su cooperación con esas entidades, en particular dentro del marco del Foro Nacional para los Derechos Humanos;

*g)* Pedir al Alto Comisionado que informe a la Asamblea General en su quincuagésimo octavo período de sesiones y a la Comisión de Derechos Humanos en su 60º período de sesiones sobre la situación de los derechos humanos en Sierra Leona, haciendo referencia a los informes de la Sección de Derechos Humanos de la Misión;

- h) Examinar esta cuestión en su 60º período de sesiones.

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]

### **2003/81. Cooperación técnica y servicios de asesoramiento en el Chad**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Reafirmando* que todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes, y el deber de cumplir las obligaciones que han asumido en virtud de los diversos instrumentos internacionales en esta esfera,

*Teniendo presente* que el Chad tiene la obligación de aplicar todos los instrumentos internacionales y regionales en los que es Parte,

*Acogiendo con satisfacción* la positiva actitud del Gobierno del Chad y su disposición a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de consolidar la cultura de los derechos humanos,

*Acogiendo también con satisfacción* la disposición del Gobierno del Chad a cooperar con los procedimientos especiales de la Comisión y a estudiar la posibilidad de invitarlos a visitar el país,

1. *Pide* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en consulta con el Gobierno del Chad, prepare un programa de asistencia técnica y servicios de asesoramiento en la esfera de los derechos humanos;

2. *Decide* seguir examinando este asunto en su 60º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

62ª sesión,  
25 de abril de 2003.  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]

## **2003/82. Cooperación técnica y servicios de asesoramiento en Liberia**

*La Comisión de Derechos Humanos,*

*Reafirmando* que todos los Estados Miembros tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes, y el deber de cumplir las obligaciones que han asumido en virtud de los diversos instrumentos internacionales en esta esfera,

*Teniendo presente* que Liberia tiene la obligación de aplicar todos los instrumentos internacionales y regionales en los que es Parte,

*Acogiendo con satisfacción* la positiva actitud del Gobierno de Liberia y su disposición a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de consolidar la cultura de los derechos humanos, la tolerancia y la reconciliación, entre otras cosas, mediante la educación en materia de derechos humanos,

1. *Decide* nombrar a un experto independiente por un período inicial de tres años para facilitar la cooperación entre el Gobierno de Liberia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la esfera de la promoción y protección de los derechos humanos proporcionando asistencia técnica y servicios de asesoramiento;

2. *Invita* al experto independiente a visitar Liberia para evaluar la situación de los derechos humanos en el país y a presentar a la comisión en su 60º período de sesiones un informe inicial sobre esa cuestión;

3. *Pide* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que facilite recursos adecuados al experto independiente para que pueda llevar a cabo su mandato;
4. *Decide* examinar esta cuestión en su 60º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

*62ª sesión,*  
*25 de abril de 2003.*  
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]